



A 70 años de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: ¿Ha cambiado algo en la relación colonial/territorial?

Alejandro Torres Rivera
27 de abril de 2022

“Ni lo pasado puede ser más que como fue, ni cabe que lo presente sea más que como es; el puede ser es siempre futuro”

Ensayo *Adentro*, 1900
Miguel de Unamuno

Buenos días a todas las personas asistentes a las discusiones de este panel. Mi respeto y saludo fraternal al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Lcdo. Julio Fontanet Maldonado, al Dr. Ángel Collado Schwarz y a la licenciada Annette Martínez Orabona.

I. Introducción:

La mitología griega nos habla de un personaje identificado con el nombre de Sísifo rey de Éfira, ciudad-estado que eventualmente será conocida como Corinto. Sísifo era considerado un rey malvado. Por sus acciones fue condenado por los dioses del Olimpo. El castigo impuesto al monarca consistía en tener que empujar constantemente cuesta arriba por una ladera empinada una enorme piedra. Poco antes de alcanzar el tope de la montaña, la piedra rodaba una y otra vez hacia abajo, obligando así a Sísifo a empezar nuevamente su esfuerzo por subir ladera arriba la piedra.

Ese fue el castigo a perpetuidad impuesto por los dioses al pobre rey. Algo así aparenta ser el suplicio al que los/as puertorriqueños/as nos hemos visto sometidos a lo largo de más de 500 años de condición colonial, particularmente aquella que al presente, desde 1898 padecemos con relación a los Estados Unidos de América.

Entre 1951 y 1952 se llevó a cabo en Puerto Rico un proceso de convención constitucional que produjo en 1952 una Constitución para reglamentar asuntos estrictamente locales de gobierno territorial. Con la constitución del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus promotores, Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, pretendieron informar a la comunidad internacional que Puerto Rico había ejercido su libre determinación mediante el establecimiento un pacto o convenio en su relación futura con los Estados Unidos.

Los Estados Unidos, sin embargo, no sólo dejaron plasmado la falsedad de tal premisa ejerciendo de manera continua sobre Puerto Rico las prerrogativas que dicho país asume sobre sus territorios (posesiones y propiedades) bajo el Artículo IV, Sección 3 de su Constitución, sino también aquellas que le confiere el Artículo IX del Tratado de París, ratificado en 1899. Para asegurar que el pueblo puertorriqueño no fuera más allá de los limitados poderes administrativos delegados mediante un mecanismo de enmiendas a la Constitución aprobada, entre otras modificaciones el gobierno de los Estados Unidos introdujo, como condición para la ratificación del documento constitucional, que el pueblo de Puerto Rico consintiera a incorporar en el Artículo VII de nuestra Constitución una Sección 3. Su alcance era y es impedir modificaciones a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos que alterara la forma republicana de gobierno establecida; aboliera la Carta de Derechos según quedó finalmente establecida luego de la exigencia de la eliminación de su Sección 20; o que fueran incompatibles con la Resolución del Congreso aprobando la Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución federal a Puerto Rico y con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.

Por otra parte, utilizar el mecanismo de enmiendas a la Constitución de Puerto Rico mediante una Convención Constituyente, tal como dispone la Sección 3 del Artículo VII, nunca llevaría a la libre determinación del pueblo puertorriqueño. Como induce a pensar, y en efecto es el resultado, cualquier proceso de enmiendas que se formulen a través de los mecanismos contemplados en dicho Artículo VII, supone que para que las cosas cambien, deben continuar siendo iguales.

La experiencia de los pasados 70 años nos indica que el camino hacia la libre determinación del pueblo puertorriqueño debe transitarse fuera del mecanismo de Convención Constituyente contemplado en el

Artículo VII de nuestra Constitución. De lo contrario, todo esfuerzo para subir y trascender la colina del coloniaje, comparará con aquel esfuerzo del Sísifo de la mitología al intentar subir la piedra.

II. Primera subida de la piedra por Sísifo:

Mediante la Ley Pública 600 del 81er. Congreso, *Ley Proveyendo para la Organización de un Gobierno Constitucional por el Pueblo de Puerto Rico*, se dispuso en 1950 que de ser aprobada la delegación hecha mediante dicha Ley por los electores en Puerto Rico, se convocaría a una “convención constitucional” que “redactara una Constitución para la Isla de Puerto Rico.”¹

El texto de la ley requería que la Constitución creara un “gobierno republicano en forma” e incluyera una Carta de Derechos. La Ley dispuso, no obstante, que al ser adoptada la Constitución por el pueblo de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos quedaba “autorizado para enviar tal Constitución al Congreso de los Estados Unidos, si él llega a la conclusión de que tal constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y de la Constitución de los Estados Unidos.”

Sometida a votación la propuesta contenida en la Ley 600-1950 y votada a favor por la mayoría de los electores participantes en el referéndum celebrado a tales fines, fue convocada la “convención constitucional” dispuesta en la Ley. En su “Proclama” de 27 de agosto de 1951, sin embargo, el gobernador Luis Muñoz Marín se refiriera a la misma como “Convención Constituyente”.²

¹ El texto en inglés de la referida Ley 600-1950 no menciona el término Convención Constituyente sino Convención Constitucional.

² Existe una diferencia de fondo entre ambos conceptos. El Lcdo. Roberto Ariel Fernández Quiles indica en su libro titulado *El Constitucionalismo y la Encerrona Colonial de Puerto Rico (2004,)* que los puertorriqueños nunca hemos celebrado un proceso constituyente toda vez que el poder constituyente reside en el ejercicio de la soberanía y no puede estar sujeto a limitaciones jurídicas impuestas por otro pueblo. A tales efectos indica:

“...el serio defecto de la constitución de Puerto Rico es que los poderes constituidos que crearon otro pueblo—el estadounidense—ostentaron la

A partir de esta Proclama, en documentos posteriores generados en Puerto Rico relacionados al proceso de aprobación de una Constitución, se abandona el lenguaje de “convención constitucional” contenido en la Ley 600-1950 siendo sustituido por “Convención Constituyente.” Así surge de las Resoluciones número 22 y 23 de la convención a cuyo cargo estuvo la redacción de la Constitución.

En la Resolución 23, titulada *Declaraciones Finales de la Convención Constituyente de Puerto Rico*, se expresó en su POR

titularidad de la soberanía al ‘autorizar’ al pueblo de Puerto Rico a que adoptara una constitución, y atribuirse el poder de aprobarla como requisito indispensable para que entrara en vigor. De esta manera, el Congreso habría ejercido el poder constituyente, si por ello se entiende que produjo una constitución al autorizar, limitar, supervisar, enmendar y aprobar el documento que redactaron y aprobaron los puertorriqueños.”

En su ensayo titulado *Autodeterminación del pueblo de Puerto Rico mediante la Asamblea Constitucional de Status*, 71 Rev. Jur. UPR, 821-824 (2002), el Dr. Carlos Gorrín Peralta destaca que fue Samuel Sieyès quien publicó en 1788 en su libro *¿Qué es el Tercer Estado?*, los fundamentos en los cuales descansan hoy día los criterios para definir el concepto “poder constituyente”. Indica tal poder constituyente como “la facultad inherente del pueblo como titular de la soberanía de establecer su ordenamiento jurídico-político fundamental.” Señala que en su elaboración Sieyès establece la diferencia entre lo que es el “poder constituyente originario” de lo que es el “poder constituyente derivado”. El primero lo cataloga como aquel que se ejercita en “la fundación de una sociedad política mediante el establecimiento de su organización política y jurídica fundamental sin atenerse a reglas positiva preexistentes”, por lo que lo tipifica como un “poder absoluto, ilimitado, total”; a diferencia del segundo, que lo describe como aquel que “se ejercita cuando el acto constituyente persigue modificar total o parcialmente la organización política y jurídica conforme a los procesos establecidos en la constitución misma y sujeto a las limitaciones que ésta pueda establecer.”

Gorrín Peralta señala, además, que el poder que debe invocar el pueblo puertorriqueño en su derecho a la libre determinación es el constituyente originario “para repudiar la condición de territorio no incorporado, sujeto a la cláusula territorial, y sentar la nuevas bases sobre las que se debe erigir el Estado.”

Véase, además, *Las Obligaciones de Estados Unidos al amparo de su Derecho Constitucional Doméstico y del Derecho Internacional, sobre la Descolonización de Puerto Rico*: Torres Rivera, Alejandro, Revista Jurídica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vol. 77, Núm. 1 (2019), págs. 48-56.

TANTO Tercero (d) que, mediante el “pleno gobierno propio” alcanzado, desaparecía “todo vestigio colonial.” Por su parte, el POR TANTO Tercero (e) dispuso lo siguiente:

“El pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos de América, de modo que éstas en todo tiempo sean la expresión de acuerdo libremente concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.”

Demoleadora sería la realidad cuando una vez aprobada originalmente por el pueblo la Constitución redactada, el gobierno de Puerto Rico debió enfrentarse la muralla impuesta por los Estados Unidos para la aceptación del documento aprobado en convención y ratificado por nuestro pueblo. Así, mediante la Ley Pública 447 del 82do. Congreso, *Resolución Conjunta aprobando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue adoptada por el Pueblo de Puerto Rico en 3 de marzo de 1952*, el Congreso de los Estados Unidos condiciona la aprobación del documento aprobado por los/as puertorriqueños/as, elaborado por la “convención constitucional,” a la inclusión, entre otros extremos al Artículo VII, de una Sección 3 que indica:

“Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero adoptada con el carácter de un convenio.”

III. Segunda subida de la piedra por Sísifo:

La Ley Pública 447 antes citada dispuso, además, que la constitución comenzaría a regir, solo “cuando la Convención Constituyente de Puerto Rico haya declarado en resolución formal su aceptación, a nombre del Pueblo de Puerto Rico de las condiciones de aprobación aquí contenidas” y cuando el Gobernador expidiera una proclama adoptando y aceptando los cambios contenidos en dicha Ley Núm. 447.

Mediante la Resolución Núm. 34 de la Convención Constituyente de 10 de julio de 1952, fueron aceptadas las condiciones impuestas por el Congreso de los Estados Unidos. Así se dispuso mediante Proclama suscrita por el gobernador Luis Muñoz Marín el día 25 de julio de 1952.³ Las enmiendas impuestas por los Estados Unidos a la Constitución fueron sometidas por vía separada al voto del electorado de manera conjunta con las elecciones de noviembre 1952 siendo ratificadas; luego de lo cual, el 29 de enero de 1953, mediante otra Proclama, se pusieron en vigor los cambios introducidos por el Congreso de los Estados Unidos.

Al referirse al procedimiento del Artículo VII para cambios en la Constitución, el Lcdo. José Trías Monge, en el Tomo III de su obra *Historia Constitucional de Puerto Rico* (págs. 257-258), indica que la “Comisión de Preámbulo” de la Convención Constituyente recomendó una redacción para el Artículo VII de la Constitución que disponía:

“Ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su carta de derechos.”

Nótese que la redacción propuesta no condicionaba posibles cambios en la Constitución a los parámetros impuestos finalmente por el Congreso de los Estados Unidos. Tales condicionantes fueron a su vez descritas por el propio Trías Monge como vulnerables de “elementales exigencias de la libre determinación”, así como de “humillantes condiciones al pueblo de Puerto Rico para la ratificación de la Constitución remitida.”

El proceso seguido tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos en la ratificación de la Constitución fue intenso, sobre todo por la fuerte oposición de senadores y congresistas a la aprobación de la Sección 20 de la Carta de Derechos y sus reivindicaciones sociales y económicas; como también, para forzar un lenguaje que garantizara claramente el poder del Congreso de

³ La aceptación de la imposición coincide con el aniversario de la Invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898.

los Estados Unidos sobre Puerto Rico. El resultado en este caso fue la Sección 3 del Artículo VII.

Al reunirse nuevamente la Convención Constituyente el 7 de julio de 1952 para acordar o rechazar los cambios impuestos por el Congreso de los Estados Unidos, ante la opción de mantener al país bajo una Carta Orgánica como era la Ley Jones de 1917, el 10 de julio se aprobó en forma unánime la Resolución Número 34 aceptando los términos establecidos por el Congreso.

En el texto citado, el Lcdo. Trías Monge manifiesta a la página 312:

“A partir de mayo de dicho año, en que el partido de mayoría se vio forzado, si era que iba a haber constitución, a consentir a la eliminación de la sección 20 por la Cámara de Representantes, el resultado encarnado por la Resolución Núm. 34 era ya asunto decidido, si es que se tenía éxito en el Senado. Más con igual firmeza se vio crecer desde aquel tiempo en Muñoz Marín y otros de sus seguidores la determinación de insuflarle mayor vida a la endeble criatura que nació de parto tan doloroso. Muchas serían las humillaciones y derrotas que se sufrirían en la persecución de tal propósito y al cabo quebrantarían la voluntad de muchos de seguir dicha ruta. En la primera confrontación que hubo, esta vez en las Naciones Unidas, después del establecimiento del Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952, se logró aclarar, aunque por poco tiempo, la naturaleza de la nueva entidad.”

IV. Tercera subida de la piedra por Sísifo

En la Conferencia de San Francisco efectuada en 1945, con la participación de 51 países incluyendo a los Estados Unidos, se fundó la Organización de las Naciones Unidas. La Carta constitutiva de la Organización consigna en su Capítulo XI, Artículo 73, que aquellos Estados “que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio”, tienen hacia los habitantes de tales territorios, entre otras, la obligación de “desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y ayudarles en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones

políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”. En tal virtud, contempla dicho artículo, existe la obligación de tales Estados de “transmitir regularmente al Secretario General información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios”.

Mediante la Resolución Número 648 (VII) de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo internacional, atendiendo al contenido de su Resolución previa Número 222 (III) de 3 de noviembre de 1948, la cual disponía que debía mantenerse informado a dicho Organismo de “cualquier cambio en el *status* constitucional de todo territorio no autónomo”, determinó, además, que “para considerar que un territorio tiene autonomía en asuntos económicos, sociales o educativos, es indispensable que su pueblo haya alcanzado la plenitud del gobierno propio a que se refiere el Capítulo XI de la Carta”.

Como anticipara Trías Monge, desde el 17 de septiembre de 1951, el gobierno de Estados Unidos había informado a la Organización de las Naciones Unidas la aprobación por parte del Congreso de la Ley Núm. 600 de 1950. En ella se autorizaba al pueblo de Puerto Rico a votar en referéndum si deseaba o no redactar una Constitución mediante el mecanismo de una “convención constitucional” a través de la cual el pueblo puertorriqueño “pueda organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo”.

Nos dice el Dr. Carlos Gorrín Peralta, en *Constitucionalismo Colonial y Autodeterminación de Puerto Rico*, Volumen LI, agosto-mayo 2017, Número 1, a las páginas 18-19 lo siguiente:

“...nunca hubo un referéndum en que el pueblo efectivamente votara por alternativas diversas; sólo pudo votar sí o no a la alternativa única de crear el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si votaba no, permanecería bajo el régimen de las leyes orgánicas aprobadas por el Congreso en 1900 y 1917. Las opciones reales eran seguir en la relación territorial bajo la ley federal, o seguir bajo la relación territorial de una ‘constitución’ consentida por el pueblo, pero aprobada por el Congreso.”

Aprobadas las modificaciones impuestas por el Presidente de Estados Unidos y el Congreso, los delegados elegidos por los puertorriqueños en la “convención constitucional” autorizada por la Ley 600-1950, aprobaron la Resolución Número 34 de 10 de julio de 1952, por lo que habiéndose proclamado ese mismo mes el día 25 de julio el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, **la Asamblea General de la ONU aprobó finalmente el día 27 de noviembre de 1953, mediante votación de 26 votos a favor, 11 votos en contra y 19 abstenciones su Resolución Número 748 (VIII).**⁴

En el proceso de su aprobación el embajador estadounidense manifestó ante la Asamblea General del organismo, hablando a nombre del presidente de los Estados Unidos, lo siguiente:

“Estoy autorizado a decir a nombre del Presidente de los Estados Unidos que si en algún momento la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adopta una resolución en favor de una independencia más completa o aún absoluta, él le recomendará inmediatamente al Congreso que otorgue esa independencia. El Presidente también desea que le diga que, en ese caso, él vería con buenos ojos que Puerto Rico se adhiera al Tratado de Río de Janeiro y a la Carta de las Naciones Unidas,”

En el proceso de aprobación de la Resolución 748 (VIII) de las Naciones Unidas, el organismo concluyó que, habiendo considerado el “acuerdo” al que habían llegado los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, “al constituir una asociación política que respeta la individualidad y la fisonomía cultural de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y América Latina y constituye un vínculo de solidaridad continental”, Puerto Rico “ha alcanzado un nuevo *status* constitucional”. Indicaron también en su Resolución que la asociación concertada había sido de “común acuerdo”, dándole así vida y reconocimiento internacional a la teoría de

⁴ En el proceso de aprobación de la referida Resolución 748 (VIII), el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Henry Cabot Lodge, le comunicó el 20 de marzo de 1953 al Secretario General de las Naciones Unidas antes de que se aprobara dicha Resolución, que su país, conforme a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, no continuaría enviando informes sobre Puerto Rico.

un “convenio”⁵ alcanzado entre los dos pueblos. Así también indica que Puerto Rico había “ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación”; y que el pueblo puertorriqueño había sido “investido de atributos de soberanía política”, lo que le colocaba en el plano de una “entidad política autónoma”. En consecuencia, resuelve el organismo internacional, cesaba la obligación de Estados Unidos de rendir informes sobre Puerto Rico al amparo del Capítulo XI de la Carta de la ONU.

La Resolución indicó en su apartado noveno lo siguiente:

“Expresa la seguridad de que, conforme al espíritu de la presente resolución, a los ideales expresados en la Carta de las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme al status jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes

⁵ La teoría del “convenio” fue hecha trizas por el propio gobierno de Estados Unidos durante la vista de argumentación oral ante la Corte Suprema de dicho país en el caso *Commonwealth v. Sánchez Valle*, decidido por el 9 de junio de 2016. Al ser cuestionada la posición de la representación legal de la Oficina del Procurador de Justicia de Estados Unidos. En su contestación a preguntas formuladas, se expresó que el significado del término “convenio” se refería estrictamente a que los puertorriqueños podrían escoger la redacción de su propia constitución bajo los parámetros que expresaba la Ley 600 y por su parte, el presidente de Estados Unidos y el Congreso expresarían su conformidad o no con el texto de la misma reservándose el derecho a ratificarla en los términos que el presidente y el Congreso acordaran. Así lo expresó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

“The language signifies that the process set out in Public Law 600 would take effect only if the people of Puerto Rico chose local self-government and only if they agreed to adopt a constitution in accordance with the process and conditions set out by Congress...The ‘compact’ was an agreement that Congress would permit self-government if the people of Puerto Rico drafted a Constitution and Congress approved it...Congress did not purport to cede authority over Puerto Rico or be bound by terms of Public Law 600 for all time. Instead, Congress retained the authority to approve or disapprove the constitution and reaffirmed that it could legislate for Puerto Rico in the future...”

en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.”

En el seno de las Naciones Unidas, sin embargo, el Partido Independentista Puertorriqueño intentó evitar que se reconociera por dicho organismo internacional al Estado Libre Asociado como opción descolonizadora. La inconformidad del Partido Independentista Puertorriqueño, expresada por voz de su presidente, el Lcdo. Gilberto Concepción de Gracia, no se limitó a la denuncia de la Ley 600-1950 en su proceso de aprobación por el Congreso y su ratificación por los puertorriqueños. Incluyó también la denuncia de la consulta hecha al pueblo.

El PIP no participó del proceso de referéndum en torno a la Ley Núm. 600-1950, ni del proceso de selección de delegados a la asamblea constitucional. No obstante denunció el carácter colonial del proceso en el cual, el presidente y el Congreso de Estados Unidos, impusieron modificaciones al documento constitucional, demostrando así la fragilidad del proceso llevado a cabo bajo a partir de la ratificación de la Ley 600-1950.

A raíz de la aprobación de la nueva constitución, el escenario de la discusión se había movido al plano internacional, en particular en el seno de las Naciones Unidas. Allí el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y en conjunto con una delegación del gobierno de Puerto Rico, había solicitado del foro internacional que Puerto Rico fuera sacado de la lista de territorios no autónomos. Con ello perseguían que Estados Unidos como potencia administradora, no tuviera que rendir informes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los pasos dados para viabilizar el ejercicio del derecho de los puertorriqueños a su libre determinación.

Para el independentismo, tanto en el seno del PIP como del Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador, el proceso seguido tras la Ley 600-1950 era uno donde no se produjo tal ejercicio de libre determinación por parte del pueblo puertorriqueño.

En Puerto Rico, el presidente del PIP, denunció esta nueva maniobra con gran verticalidad. Señalaba en un discurso pronunciado

en el Senado de Puerto Rico el 4 de mayo de 1953⁶ que con la “constitución” aprobada “el gobierno de Estados Unidos no ha resuelto el problema de soberanía del pueblo Puertorriqueño (sic); no le ha concedido atributo alguno de soberanía, no le ha delegado poder alguno irrevocables para gobernar su vida.” Señalaba que la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico preservaba “el sistema colonial en toda su dureza, con todas sus arbitrariedades, con todas sus intervenciones, con todas sus negociaciones [¿negaciones?] al derecho natural de los Puertorriqueños (sic) a regir su propia vida.”

En este discurso, Don Gilberto alude a elementos que posteriormente estarían considerados en 1960 en el marco de las Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de las Naciones Unidas. Haciendo referencia a los nuevos desarrollos en las relaciones internacionales en torno a la libre determinación de los pueblos, señalaba una “lista de factores que recomendó el Comité Ad Hoc y que adoptó la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1952” en materia de descolonización, a saber: que el territorio haya adquirido su “independencia nacional”; que el territorio haya alcanzado un “sistema separado de gobierno propio”; o que “exista la libre asociación del territorio con las partes integrantes de una metrópoli o con otro país”.⁷

Señaló que “para que concurren los factores, en el caso de la independencia, es requisito indispensable que el territorio posea un *status* internacional, con poderes para concertar libremente relaciones directas de todas clases con otros gobiernos y otras instituciones

⁶ *Gilberto Concepción de Gracia: En nombre de la verdad* (2007), Pablo Marcial Ortiz Ramos, Editor, páginas 281-293.

⁷ El 18 de enero de 1952 la Asamblea General de la ONU había aprobado la Resolución Número 567 (VI). En ella establecía un procedimiento “para decidir si un territorio es o no un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio”. En su Anejo a la Resolución, se incorporan los elementos definitorios mediante los cuales podría hablarse de que un territorio ha alcanzado “la libre expresión de la voluntad de la población”. A tales efectos, la Resolución establece tres opciones principales para expresar dicha voluntad, a saber: (a) el logro de la independencia; (b) “la unión del territorio a base de igualdad en lo referente al *status* político, con las otras partes constitutivas de la Metrópolis o con otro país”; o (c) “su asociación en las mismas condiciones de igualdad con la Metrópolis o con otro país o países”.

internacionales, así como para negociar, firmar y ratificar libremente convenios internacionales, además de elegibilidad para ser miembro de las Naciones Unidas.” Si tal era la exigencia, indicaba, y en el caso de Puerto Rico luego de 1952 no se cumplía con tales factores, entonces “Puerto Rico no disfruta de un sistema separado de gobierno propio con status internacional.”

Al discutir los factores a considerar en el caso de una libre asociación del territorio con la metrópolis, señaló los siguientes: (a) debe haber una Constitución nacional; (b) que la misma sea en virtud de un tratado o convenio en virtud del cual las garantías constitucionales se extiendan en términos iguales a los habitantes del territorio; (c) que ciertos poderes queden reservados al territorio o a la autoridad central; y (d) que haya una disposición en virtud de la cual el territorio tenga una participación, sobre bases de igualdad, en cambios al sistema constitucional del Estado. Razonaba que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era una de ataduras del primero con el segundo, destacando que, bajo la nueva constitución aprobada en 1952, Puerto Rico no dejó de ser un “territorio no incorporado” de Estados Unidos.

Al analizar los requisitos que debían ser incluidos en el caso de una libre asociación, señalaba que debían estar presentes: (a) la representación legislativa en pie de igualdad en el Gobierno Central; (b) la ciudadanía sin que medie discrimin; y (c) la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Al examinar la ciudadanía estadounidense, impuesta a los puertorriqueños en 1917, denunció que era “una ciudadanía sin nacionalidad, sin constitución y sin soberanía.”

Resulta interesante que, al abordar el tema de la integración de un territorio con la metrópolis, en el contexto del paso dado por Puerto Rico en 1952, indicaba que ni la nueva Constitución, ni el proceso seguido en el proceso de aprobación de ésta, supuso la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos. Para ello, indica, hubiera sido necesario en el caso de gobierno propio, las mismas atribuciones de gobierno propio de cada uno de los Estados de la Unión; el respeto del gobierno federal “a la soberanía reservada a los estados” en sus asuntos internos; el derecho, como en el caso de los demás estados, a que el gobierno federal no pudiera revocar, enmendar, suspender tal Constitución, lo que tampoco ocurría bajo la Constitución del ELA de

1952; la plena igualdad entre los estados de la Unión y Puerto Rico; y la colocación de Puerto Rico fuera de las disposiciones del Artículo IV, Sección 3 de la Constitución federal.

En otro discurso, pronunciado el 13 de septiembre de 1953,⁸ Concepción de Gracia presentó un Informe detallado del resultado de las gestiones de la delegación del PIP ante las Naciones Unidas en el contexto de la discusión de lo que eventualmente resultó ser la Resolución 748 (VIII) de la Asamblea General. En el informe discute nuevamente los tres grupos bajo los cuales la Asamblea General señalaba cuándo una potencia administradora podía demostrar que “el territorio dependiente ha alcanzado la plenitud de su gobierno propio”, a saber: la independencia, sistema separado de gobierno propio y “la libre asociación del territorio con las partes integrantes de una metrópoli (sic) o cualquier otro país”.⁹

En este discurso señala el triste rol y la pobre conducta desarrollada por los representantes del Estado Libre Asociado como parte de la delegación encabezada por el Dr. Antonio Fernós Isern en el curso de las discusiones llevadas a cabo en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Concepción de Gracia denunció, también, las mentiras contenidas en las expresiones hechas por el delegado de Estados Unidos, el señor Mason Sears, en el seno de la Cuarta Comisión¹⁰ el organismo. Al describir la conducta de este funcionario del gobierno de Estados Unidos le imputa mentir y ejercer falsa representación ante el organismo internacional.

Sin que fuera desmentido por Fernós Isern o por algún otro miembro de la delegación del gobierno de Puerto Rico, este funcionario estadounidense indicó que en 1948 se habían efectuado unas elecciones en Puerto Rico en las cuales el electorado puertorriqueño había sido consultado sobre el tipo de gobierno que deseaba, como si

⁸ *En nombre de la verdad, Óp. Cit.*, páginas 295-321.

⁹ Nótese que, a diferencia de los conceptos actuales, donde a raíz de la Resolución 1541 (XV) de las Naciones Unidas se incluyen la independencia, la asociación y la integración, en aquel momento se presenta la “integración” bajo una modalidad de “libre asociación”.

¹⁰ Conocida también como Comisión Política Especial de Descolonización.

tal votación fuera un ejercicio en el cual se solucionaba el problema de *status* político de los puertorriqueños. Según afirmó este funcionario, las opciones que se habían presentado al electorado eran: un estado de la Unión federal, completa independencia o un Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Señaló, además, que el Dr. Fernós Isern había radicado “en el Congreso legislación que pondría en vigor el voto plebiscitario nacional”; y que había sido, a raíz de dicha legislación, que había surgido la Ley 600-1950 autorizando a los puertorriqueños a redactar su propia constitución.

El discurso de Concepción de Gracia recoge, además, los debates por parte de otros representantes de los países que intervinieron en las deliberaciones de la Cuarta Comisión, incluyendo su votación en torno a los proyectos de resolución propuestos. El proceso iniciado en la Cuarta Comisión fue el que eventualmente condujo a la aprobación por parte de la Asamblea General de la referida Resolución 748 (VIII).

A pesar de la derrota que representó la validación por parte de las Naciones Unidas del Estado Libre Asociado, expresando que el mismo era una forma de gobierno en la cual el pueblo puertorriqueño había alcanzado un tipo de gobierno propio compatible con el ejercicio de su derecho a la libre determinación, Concepción de Gracia valoró aquel momento histórico como un triunfo para la causa de la independencia. A tales fines señaló:

“Baste decir por hoy, que la mera inclusión del caso de Puerto Rico en la agenda de la Asamblea General constituye un triunfo sin precedentes para el movimiento independentista de Puerto Rico.”

El presidente del PIP consideraba que llevar el caso de Puerto Rico ante la consideración de la Asamblea General, eventualmente desembocaría “en el reconocimiento de nuestra independencia.”

Habría que esperar 20 años para que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas creado en virtud de la Resolución 1514 (XV) asumiera jurisdicción sobre el caso colonial de Puerto Rico. Al presente dicho Comité ha emitido 39 Resoluciones afirmando el derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia.

V. Quinta subida de la piedra por Sísifo:

En marzo de 1959 el Dr. Fernós Isern como Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington junto al Senador James Murray presentaron un proyecto de legislación que pretendía ampliar el marco del gobierno propio establecido mediante la Constitución de 1952. El Proyecto llevaba por título “The Articles of Permanent Association of the People of Puerto Rico with the United States”.

De acuerdo con Roberto Colón Ocasio, en su ensayo titulado *Antonio Fernós Isern: soberanista y Luis Muñoz Marín: autonomista; divergencias ideológicas y su efecto en el desarrollo del Estado Libre Asociado*,¹¹ Fernós estaba consciente de que el Estado Libre Asociado “no fue investido, desde su nacimiento, con el grado de soberanía que su creador anhelaba conquistar.” De ahí su interés en “perfeccionarlo” mediante el establecimiento de una relación en la que Puerto Rico tuviera soberanía suficiente en asuntos internos sin intervención externa por los Estados Unidos, aunque en una asociación por mutuo consentimiento con dicho país. Este intento de 1959 fracasó.

Indica el Lcdo. José Trías Monge que desde el primer momento hubo gran hostilidad al proyecto de ley, particularmente a cualquier cambio en las relaciones políticas entre ambos pueblos, aunque no así de parte de los Departamentos de Estado y Justicia de los Estados Unidos.¹² Este proyecto congresional no presuponía que el pueblo puertorriqueño convocara un proceso de Convención Constituyente bajo el Artículo VII de la Constitución, aunque sí planteaba la necesidad de enmiendas a la Constitución conforme a una nueva relación política. A pesar de su fracaso, el tema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos siguieron en la interminable agenda de los Estados Unidos y Puerto Rico.

¹¹ Revista *Ceiba*, año 5 Núm. 2 (Segunda Época) agosto 2005-mayo 2006, págs. 36-43.

¹² Trías Monge, José, *Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World*, (1997), página 126-127.

Indica la Dra. Neysa Rodríguez Deynes en su ensayo titulado *En la política de los absurdos, Puerto Rico es el Rey*, Revista *Horizontes*, Años LVI-LIX, Núms. 106-115, otoño 2013-2016, lo siguiente:

“...A partir de entonces se han constituido cuatro Comisiones sobre el Estatus con el propósito de analizar el estado político de Puerto Rico y hacer recomendaciones al respecto. La primera fue un *Grupo Asesor* del Presidente John F. Kennedy entre 1961 y 1962, compuesta por funcionarios del Gabinete del Presidente, de los Departamentos de Defensa, Estado y Justicia y pasados asesores presidenciales. El *Grupo Asesor* concluyó en aquel entonces que “la naturaleza del Estado Libre Asociado permite desarrollar los mecanismos para que Puerto Rico pueda llevar a cabo relaciones comerciales y participar en organizaciones internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.”¹³

Más adelante la autora menciona la aprobación de la Resolución Conjunta Núm. 1. En ella la Asamblea Legislativa de Puerto Rico menciona nuevamente el interés por perfeccionar el ELA y los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos para establecer un procedimiento conocidos como Proyectos Aspinall-O'Brien¹⁴. Luego nos señala la

¹³ Esta conclusión será otro desengaño para los promotores del estatus colonial.

¹⁴ Trías Monge, José, *Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World*, *Op. Cit.*, página 129, indica:

“On April 30, 1963, Congressman Wayne N. Aspinall of Colorado introduced the bill, which created al United States-Puerto Rico Compact Commission, compose of members appointed by the President of the United States, the President of the Senate, the Speaker of the House and the Governor of Puerto Rico. The Commission was asked to draft a ‘compact of permanent union between the government of the United States and the people of Puerto Rico’ ,pursuant to such principles as ‘recognition and reassertion of the sovereignty of the union between the Unites States and Puerto Rico on the basis of common citizenship, common defense, common currency, free market, common loyalty to the values of democracy, an such other conditions as may be considered, in compact , of mutual benefit to the United States and Puerto Rico.”

Señala también el autor que el proyecto perseguía establecer los poderes específicos de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la reserva del resto de los

aprobación por el Congreso de la Ley Núm. 88-771, mediante la cual se crea la “Comisión de los Estados Unidos y Puerto Rico sobre Estatus”, donde de manera conjunta el Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson y el gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín, designa cada parte sus representantes. La Comisión emitirá en 1966 su Informe recomendando el plebiscito llevado a cabo en 1967. La consulta favoreció la opción de ELA; el independentismo apenas participó desarrollándose por éste una campaña anti plebiscitaria. El triunfo en las elecciones de 1968 del Partido Nuevo Progresista dejó en suspenso toda acción relacionada con el resultado de la consulta plebiscitaria.

Nos recuerda Trías Monge¹⁵, que ya para “fines del cuarenta e inicio de los cincuenta, el PPD resucitó el asunto del estatus, pero con el entendido expreso, especialmente visible en los debates de la Asamblea Constituyente, de que el Estado Libre Asociado no cerraba puertas a la aspiración eventual de constituir a Puerto Rico en Republica o en Estado de la Unión Americana. Años más tarde, sin embargo, particularmente para los años sesenta, el PPD comenzó a intentar trancar puertas, a postular que el Estado Libre Asociado representaba un fin en sí, diferente a la estadidad y la independencia e incompatible fundamentalmente con ambas.”

Muñoz Marín intentó llevar a cabo un proceso de enmiendas a la Constitución tomando como base el resultado del plebiscito de 1967 a los fines de que no se pudieran llevar a cabo cambios fundamentales a la Constitución de 1952 en materia de estatus sin su aprobación mediante el voto de la mayoría de los electores participantes. A tales efectos, el entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Rafael Hernández Colón propuso legislación con dos propuestas de enmienda a la Constitución; la primera, que no pudiera hacerse cambios en el estatus a no ser que fuera mediante el mecanismo de plebiscito dispuesto en el Artículo VII de la Constitución; segundo, que no pueda celebrarse tal plebiscito sin una votación previa en las urnas donde se autorice llevar

poderes por parte de Puerto Rico. [...the specific definition of the powers of the United States with respect to Puerto Rico and the reservation of all powers to the people of Puerto Rico...”]

¹⁵ Véase Trías Monge, José, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, Volumen V, página 41.

a cabo tal tipo de plebiscito, condicionado a que se solicitara a consulta por un 10% de los electores inscritos. En el debate de la propuesta, luego de múltiples sugerencias de cambio sin llegar a un acuerdo, se producen las elecciones de 1968 en las cuales el Partido Popular fue derrotado. Una vez más la piedra de Sísifo se vino abajo para dicho partido. Como resultado de estas elecciones, la gobernación y la Cámara de Representantes quedaron bajo el control del Partido Nuevo Progresista y el Senado bajo el control del PPD.

VI. Sexta subida de la piedra por Sísifo :

La Ley habilitadora de la consulta plebiscitaria de 1967 disponía que el gobernador notificaría al presidente de los Estados Unidos la constitución conjunta de grupos de trabajo para atender el asunto del estatus. En el caso de la fórmula que ganó, suponía discutir el desarrollo del ELA. Entre los asuntos a considerar se encontraban: leyes de cabotaje; aspectos contributivos de empresas que operaban en Puerto Rico; ampliación de los programas de ayudas federales; aportación de Puerto Rico a los programas de ayudas federales; aplicación a Puerto Rico del salario mínimo federal; participación de Puerto Rico en la negociación de tratados comerciales, culturales y educativos internacionales; cambios en la aplicación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio; protección arancelaria a productos importados; aplicación de las leyes federales a Puerto Rico; y agenda de trabajo para los comités asesores.

Se llevaron a cabo vistas públicas en torno a la extensión a Puerto Rico del voto presidencial y se emitió a la altura de 1971 un Informe con recomendaciones de otra consulta al pueblo. Posiblemente es Trías Monge en *Historia Constitucional de Puerto Rico* quien mejor describe el proceso:

“El episodio de esta comisión sobre el voto presidencial con sus partes serias y sus toques bufos, es otra curiosidad más en el

rico museo puertorriqueño de los empeños vanos y los actos inconsecuentes.”¹⁶

Con anterioridad al Informe, por parte del Consejo Central del PPD se había aprobado el 19 de noviembre de 1970 un documento que pasaría a llamarse “Pronunciamiento de Aguas Buenas”. En el documento, indica Trías Monge, rechazando la opción de la “asimilación, anexión y la incorporación; rechazaba igualmente “las modalidades que caracterizan la tendencia independentista.” El documento proponía el mecanismo de una Convención Constituyente para definir el marco a ampliar de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo un nuevo pacto de asociación. El proceso, una vez más, terminó en la nada.

Con la llegada a la gobernación en 1973 del Lcdo. Rafael Hernández Colón se constituyó un *Comité Ad Hoc para el desarrollo del ELA*. Este emitió su Informe en 1975, conocido como el *Nuevo Pacto* (“Compact of Permanent Union Between Puerto Rico and the United States”). Este fue presentado ante el Congreso por el Comisionado Residente Jaime Benítez. La pérdida en las elecciones de 1976 por el PPD, sin embargo, una vez más dejó sobre el tablero la consideración de la propuesta.

En 1989, tras dos términos de administración por los promotores de la estadidad, el Partido Popular Democrático llevó nuevamente ante el Congreso de los Estados Unidos su propuesta de Nuevo Pacto en conjunto con una nueva propuesta para la realización de un nuevo referéndum. La medida no fue considerada por el Congreso. En Puerto Rico, sin embargo, en lo inmediato en la década de 1990, se efectuaron varias consultas plebiscitarias no vinculantes sobre estatus (1991, 1993 y 1998). A la vez, se produjeron varias iniciativas legislativas en el Congreso; como también, tres Informes del Grupo de Trabajo de Casa Blanca en torno al Estatus de Puerto Rico (2005, 2007 y 2011). Aún así, la piedra de Sísifo seguiría sin alcanzar el tope de la ladera.

VII. Nuevos intentos de Sísifo por subir la piedra: medidas legislativas en el Congreso y los informes del Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el Estatus

¹⁶ *Óp. Cit.*, página 91

En el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se radicaron a partir de 2006 varias iniciativas legislativas para atender el asunto de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Destacan en ellas, por el lado demócrata, los proyectos en la Cámara de Representantes y en el Senado de 2006, conocidos como “Puerto Rico Self-Determination Act”. En la Cámara de Representantes, el Comisionado Residente de Puerto Rico y afiliado al Partido Nuevo Progresista y al Partido Republicano, Luis Fortuño, sometió el H. R. 4867, titulado “Ley de la Democracia en Puerto Rico de 2006”. Un proyecto similar fue radicado también en el Senado. La medida utilizaba como referente el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de 2005.

Mientras en Puerto Rico se adelantaban propuestas para atender el problema del estatus, el 22 de diciembre de 2005 se daba a conocer el informe producido por el Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el estatus, titulado *Report by the President's Task Force on Puerto Rico Status*. En él se describe a Puerto Rico como un territorio sujeto a los deseos del Congreso de los Estados Unidos. Según el Informe, el Departamento de Justicia federal había afirmado en 1959, al igual que la Corte Suprema de Justicia en 1980 en el caso *Harris v. Rosario*, la condición territorial de Puerto Rico. Con la creación del “Commonwealth”, indicaban, no cambió la naturaleza territorial de Puerto Rico, ni el poder del Congreso bajo la Cláusula Territorial, por lo que en cualquier momento podía alterarse la naturaleza de esta relación.

El Informe indica que la Constitución de los Estados Unidos sólo contempla dos opciones de relación política permanente con los Estados Unidos: Estadidad o Independencia. Descarta la opción de un nuevo “Commonwealth” y que aquel territorio que no sea un estado de la Unión, se encuentra necesariamente bajo la autoridad del Congreso. A partir de tal premisa, el Informe sugiere distintos procesos de consulta donde el pueblo exprese si desea o no mantener la actual relación territorial respecto a los Estados Unidos.

El impacto causado por dicho Informe llevó al Partido Popular Democrático y a su Junta de Gobierno a la aprobación de la Resolución 2006-02. En ella se rechaza el Informe y reafirma el interés de dicho

partido por acordar con los Estados Unidos, como parte del ejercicio de libre determinación, nuevas bases de asociación. La Resolución creó un nuevo Comité de Estatus en dicha colectividad.

En 2007 el Grupo de Trabajo de Casa Blanca rindió un Segundo Informe. En él reitera su posición en el Primer Informe. Recomienda una consulta plebiscitaria en la cual los puertorriqueños se expresaran si querían seguir formando parte de los Estados Unidos¹⁷ bajo la actual relación política o si preferíamos una opción no territorial. Si la decisión fuera rechazar la relación territorial, proponía un segundo plebiscito con aval federal entre dos opciones no territoriales: estadidad o independencia y el correspondiente proceso de transición. Si el electorado se expresaba favoreciendo la opción territorial, se celebrarían periódicamente nuevas consultas manteniendo informada a la Casa Blanca.

El 11 de marzo de 2011, el *Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el estatus en Puerto Rico*, rindió un Tercer Informe, titulado *Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico*. En él se incluyeron, además de aspectos económicos, recomendaciones en torno al manejo del tema del estatus de Puerto Rico. En su primera recomendación en materia de estatus, señala que el Grupo de Trabajo reconoce como medios para atender la situación del estatus político de Puerto Rico la realización de plebiscitos, la “asamblea constituyente” (versión en español del Informe ya que en la versión en inglés se refiere a “constitutional convention”) u otros medios. No obstante, recomienda que el proceso que se seleccione sea uno justo, transparente y expedito, basado en la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Indica también en su segunda recomendación que las opciones permisibles de estatus deben incluir la estadidad, la independencia, la libre asociación y el estado libre asociado.

En lo concerniente a cada una de estas fórmulas, el Informe define su alcance y contenido. Es importante destacar que el Informe define a la “libre asociación” como una modalidad de independencia. Compara la misma con los arreglos que actualmente tiene Estados Unidos con

¹⁷ Esto es contrario a lo establecido desde los primeros Casos Insulares donde se consigna que Puerto Rico “pertenece a pero no forma parte de” los Estados Unidos.

las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palao, donde Estados Unidos proporciona defensa y ciertos tipos de ayudas económicas y ejerce control sobre su defensa y seguridad política, permitiendo a los ciudadanos de estas entidades el libre tránsito hacia y desde Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, indica el Informe, se recomienda que los puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses retengan la ciudadanía de Estados Unidos.

En torno al “Estado Libre Asociado”, el Informe hace referencia a que el mismo sea una “mejorado”.¹⁸

El Informe, si bien reconoce diversos métodos para atender el problema del estatus político, favorece el uso de los plebiscitos expresando también su preferencia por un sistema de dos plebiscitos: con el primero se delimitarían las opciones; con el segundo, se llegaría a una decisión final. La primera votación sería si los puertorriqueños prefieren seguir siendo parte de Estados Unidos¹⁹ o quieren ser independientes; con la segunda, las opciones serían a partir del resultado de la primera votación.

Indica también que, bajo el sistema de un solo plebiscito, las opciones en la papeleta tienen que estar basadas en opciones predeterminadas de estatus, requiriendo precisar de antemano si es suficiente una mayoría o se requiere una “supermayoría”. No se descarta en el Informe una opción híbrida en la cual se lleve a cabo una segunda votación entre las dos opciones que mayor número de votos obtenga en la primera consulta.

El Informe también maneja la variante de que en la primera vuelta se incluyan opciones futuras, descartando la actual relación, donde la opción que más votos obtenga iría a una segunda elección con el actual

¹⁸ Esta posición podría chocar con el contenido de la carta enviada por el Sub Secretario Interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 13 de abril de 2017 si es que con ello se refiere un ELA “mejorado” se concibe fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados.

¹⁹ Preferir “ser parte” es a todas luces incorrecto y lleva a error, dado que la posición de Puerto Rico como territorio no incorporado, según establecido en uno de los Casos Insulares, es que Puerto Rico “pertenece a, pero no forma parte de”, Estados Unidos.

estatus de territorio; o una consulta con todas las opciones y luego llevar a votación en una segunda vuelta las dos que mayor número de votos obtengan. También el Informe plantea una primera consulta sobre seguir siendo o no parte de Estados Unidos donde si la mayoría vota por seguir siendo parte de los Estados Unidos, habría una segunda consulta entre estadidad y estado libre asociado; si la mayoría escoge la independencia, habría una segunda consulta, entre independencia plena y libre asociación.

Indica además el Informe, en referencia a la “asamblea constituyente”, la interrogante de si la consulta en torno a esta opción se realizaría con el consentimiento previo del Congreso. A tales efectos señala:

“Asamblea constituyente. Dada la incertidumbre sobre las opciones de estatus y la necesidad de un debate cabal sobre estos en la isla, partidarios de ciertas opciones han indicado que una asamblea constituyente es la mejor manera de llegar a una resolución (sic) sobre el asunto del estatus. Las asambleas constituyentes tienen la ventaja de poder adaptar el texto de las opciones de estatus y permitir la consideración más cabal de una variedad de asuntos secundarios. Sin embargo, si (como se menciona abajo) la legislación del Congreso se compromete a respetar el resultado de una decisión tomada por el pueblo puertorriqueño, se reducen las ventajas de la asamblea constituyente. Cualquier cambio hecho por una asamblea constituyente a las opciones de estatus mencionadas en la legislación podría invalidar la promesa hecha por Estados Unidos o por lo menos requerir una medida adicional del Congreso que refleje consentimiento de los cambios hechos.

Un desafío adicional a una asamblea constituyente es la selección de delegados para esa asamblea. Los esfuerzos de extensión del Grupo de Trabajo indicaron que habría discrepancia significativa sobre la manera de elegir a los delegados. Sería posible elegir delegados, pero no está claro si ese proceso sería mejor que el concepto del propio plebiscito. Algunos promotores de esta opción argumentaron que los delegados deben ser seleccionados entre un grupo representativo de la sociedad puertorriqueña, sin énfasis en los partidos políticos.

El tipo más común de asamblea constituyente sugerido fue uno que en sí definiría las opciones de estatus, que luego se someterían a una votación popular. Con esa estrategia, la asamblea constituyente definiría las opciones de estatus (o escogería una sola opción a presentarse al pueblo), desarrollaría un proceso y redactaría la boleta, que luego presentaría al pueblo puertorriqueño, el cual votaría en un referendo. La asamblea constituyente podría realizarse antes o después de una votación por el Congreso que defina las opciones de estatus. Si la asamblea es antes de la decisión del Congreso, las opciones de estatus definidas por la asamblea podrían entrar en vigor solamente con la aprobación del Congreso. Si el Congreso no otorga dicha aprobación, es posible que sea necesario volver a convocar a la asamblea constituyente para considerar otras opciones. Si la asamblea constituyente es posterior a la decisión del Congreso, la asamblea podría aprobar las opciones de estatus definidas por el Congreso o modificarlas, pero cualquier modificación entonces requeriría aprobación adicional por parte del Congreso. El H. R. 1230, la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (Self-Determination Act) del 2007, propuso un proceso que incluía una asamblea constituyente.”

El Informe no descarta tampoco el uso de una “Comisión sobre el Estatus”, indicando que sería como una Asamblea Constituyente “más pequeña”, donde participarían además de los partidos políticos, empresas, líderes comunitarios y de la sociedad civil. A tales efectos señala el Informe:

“Comisión sobre el estatus. Como opción adicional, hay quienes han sugerido una comisión u otra entidad que tenga el propósito de identificar y describir las opciones, redactar un proceso y preparar la boleta para un plebiscito. Esta comisión sería más pequeña que una asamblea constituyente con todas las de la ley. Quienes recomiendan esa estrategia destacaron la importancia de hacer que el gobierno federal participe activamente para ayudar a salvar las diferencias entre los partidos políticos en Puerto Rico, además de la necesidad de promover la participación de las empresas, la sociedad civil y líderes

comunitarios que no quieran asociarse con un partido político u opción de estatus en particular.”

El Informe señala, en referencia a los plebiscitos o consultas, que independientemente la respuesta que surja de la consulta, el hecho es que la mayoría de los puertorriqueños valora la ciudadanía estadounidense. De ahí que recomienda que independientemente la opción escogida fuera la independencia, el Congreso se comprometa a preservar la ciudadanía estadounidense para aquellos que al momento de la transición hacia la independencia la ostenten.

Finaliza el Informe indicando que, si los puertorriqueños no aprobamos un mecanismo para atender la situación relacionada con el estatus con un resultado a corto plazo de manera transparente y justa, el Congreso debe aprobar legislación a tales efectos. A tales efectos indica, que en el proceso la información en torno a las opciones de independencia y estadidad, debe ser pertinente, veraz y exacta.

Los Informes del Grupo de Trabajo de Casa Blanca también han resultado en nada. Mientras tanto el Congreso ha continuado ejerciendo sus llamados poderes plenarios al amparo del Artículo III, Sección 4 de la Constitución federal.

VIII. Los nuevos desarrollos en torno al estatus en Puerto Rico: nuevamente la piedra de Sísifo se interpone en el intento por subir la ladera

En conjunto con las elecciones generales de 2012 se llevó a cabo una consulta plebiscitaria donde se presentó al electorado dos propuestas: (a) ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual?; (b) Preferencia sobre el estatus: Estadidad, Independencia, ELA soberano. En la primera consulta, el Sí a la condición territorial obtuvo 816,978 votos; el No a la condición territorial 958,915 votos; en blanco, 65,863 votos y protestados 13,160 votos. En cuanto a las preferencias, la Estadidad obtuvo 824,195 votos; la Independencia 74,812 votos; ELA Soberano, 449,679 votos; en blanco, 480,918 y protestados, 18, 357 votos. El resultado por no ser vinculante, fue a su vez inconsecuente.

Para el mes de enero de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Núm. 113-76, también conocida como *Consolidated Appropriations Act* de 2014. Mediante la misma destinó una partida condicionada de \$2.5 millones a ser entregados a la Comisión Estatal de Elecciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser utilizados en un “proceso objetivo no partidista de educación a los electores en un plebiscito que pudiera resolver el estatus futuro de Puerto Rico”.

En el *Informe del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes* rendido a propósito de dicha legislación, se indicó también que la recomendación **incluía \$2.5 millones para un proceso de educación no partidista en torno a un plebiscito sobre opciones que podrían resolver el estatus futuro de Puerto Rico**. Los fondos que se proveen para el plebiscito, indica el Informe, no serían liberados hasta 45 días después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le notifique al Comité que el Departamento ha aprobado el plan que sometería la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico para un proceso de educación a los electores y administración de la consulta, incluyendo la aprobación de la papeleta de votación. Disponía, además, que esa notificación al Comité de Asignaciones Presupuestarias debería también documentar que los materiales de educación a los electores, la papeleta y otros materiales relacionados no serían incompatibles con la Constitución de Estados Unidos, sus leyes y sus políticas.

Como puede verse, a tenor con dicha Ley, era al Departamento de Justicia al que le competía establecer las opciones legalmente válidas para la consulta plebiscitaria

El 20 de diciembre de 2016, el *Grupo de Trabajo del Congreso sobre crecimiento económico para Puerto Rico* emitió un Informe a la Cámara y al Senado de Estados Unidos. En el mismo, a las páginas 82 a la 84, se discute lo relacionado con el estatus de Puerto Rico. Afirmando el carácter territorial de Puerto Rico como territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial, al igual que son los casos de la Samoa Americana, Guam, la Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses, el Informe reafirma que el Congreso puede darle un trato a tales territorios distinto al que reciben los estados de la

Unión. Indica que al Puerto Rico ser un territorio no incorporado, existe “el potencial” de pasar a ser un estado de la Unión, acceder a la condición de una nación soberana, ya sea mediante una independencia plena o mediante un pacto de libre asociación, o mantener su actual estatus territorial.

Indica el Informe que, desde un punto de vista práctico, si los(as) puertorriqueños(as) desearan un cambio en su condición actual tendrían que hacerlo mediante un plebiscito imparcial ejerciendo su derecho a la libre determinación. Si los(as) puertorriqueños(as) requieren tal cambio, entonces el gobierno federal tendría que aprobar legislación para aprobar el cambio requerido. A partir de lo anterior, el Grupo de Trabajo del Congreso y del Senado recomendó que si el Gobierno de Puerto Rico llevaba a cabo una consulta plebiscitaria, tal cual autoriza y provee fondos la Ley de Apropiaaciones de 2014, el Congreso debería analizar el resultado de tal plebiscito en forma cuidadosa (“care and seriousness purpose”) y debería tomar la acción legislativa que entienda apropiada.

Una semana después, el 28 de diciembre de 2016, el *Congresional Research Service* emitió, bajo la firma de R. Sam Garret, Especialista en “American National Government”, un Informe dirigido a los integrantes del Congreso y a los miembros de sus Comités, titulado *Political Status of Puerto Rico: Brief Background and Recent Developments for Congress*. Indicaba el documento que en Puerto Rico las principales perspectivas en cuanto a estatus eran el *estatus quo*, la “estadidad” y la “independencia”, aunque también se plantean las propuestas de “ELA mejorado o ampliado” (“enhanced commonwealth”) y la “libre asociación”.

Señala el documento, sin citar una fuente al respecto, que la alternativa de un “ELA mejorado o ampliado” no es universalmente aceptado. Igualmente, al referirse a la Sección 402 de PROMESA²⁰,

²⁰ El 30 de junio de 2016 el gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley PROMESA (“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act”) creando una Junta de Supervisión, conocida popularmente como Junta de Control Fiscal, integrada por 7 personas designadas por las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos la cual asume básicamente el poder en Puerto Rico en todo aquello relacionado con la administración de su presupuesto y provee un

donde se menciona una consulta de estatus con la subvención de los \$2.5 millones, que el Congreso condicionó su entrega a que la opción del “ELA mejorado o ampliado” (“enhanced commonwealth”) quedara fuera de la papeleta. En una nota al calce señala el autor que el diciembre de 2010, el entonces presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Jeff Bingaman y la Senadora Liza Murkowski, le habían escrito al presidente Barack Obama que un “ELA mejorado o ampliado” (“enhanced”) o “nuevo ELA” (“new”) era incompatible con la Constitución y las leyes básicas de Estados Unidos en varios aspectos (“is incompatible with the Constitution and basic laws of the United States in several respects”).

Ciertamente, estos dos senadores expresaron, y así lo recoge el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de marzo de 2011, lo siguiente:

“Un asunto crucial que el Pueblo de Puerto Rico le ha pedido una y otra vez al gobierno de Estados Unidos es: ¿Cuáles son las opciones disponibles de estatus para la futura relación con Estados Unidos? En el pasado, los esfuerzos por abordar el estatus político de Puerto Rico se han visto perjudicados porque el gobierno federal no ha definido claramente aquellos asuntos sobre el estatus y eso ha socavado los esfuerzos de Puerto Rico de evaluar con exactitud la opinión de los votantes”.

El Informe del *Congresional Research Service* terminaba señalando que mientras el Congreso estuviera monitoreando la aplicación de la Ley PROMESA, el tema del estatus sería un factor a considerar. Si el Congreso opta por revisar este aspecto como asunto central y no como un mero contexto, dependerá de si el Congreso interpreta el resultado de la consulta de 2012 y el resultado de las elecciones en dicho año como un endoso a la estadidad.

A pesar de que en el programa electoral del Partido Popular Democrático de 2012 había el compromiso de atender el problema del estatus político de Puerto Rico, la realidad fue que este asunto no obtuvo ningún desarrollo en este cuatrienio. La Cámara de

capítulos para el desarrollo de los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones e instrumentalidades públicas.

Representantes de los Estados Unidos, por su parte, aprobó su versión de la Ley PROMESA, el mismo día en que su Corte Suprema resolviera el caso de *Commonwealth v. Sánchez Valle*, 579 US_____ (2016).

En el caso la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos reafirma lo resuelto previamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en su decisión en *Pueblo v. Sánchez Valle*, 2015 TSPR 25. La Ley PROMESA por su parte reconoce el derecho de los puertorriqueños a llevar a cabo una consulta de estatus.

Tanto la Ley PROMESA como la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso *Pueblo v. Sánchez Valle* dejaron al descubierto la naturaleza colonial y territorial de Puerto Rico. Una vez más la piedra de Sísifo rodó ladera abajo.

IX. La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico vs. las iniciativas en el Congreso

La “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, Ley Núm. 7 de 3 de febrero de 2017 expresa en su Declaración de Política Pública que los resultados de la consulta efectuada en 2012 constituyeron un ejercicio de libre determinación y que su resultado expresa en primer lugar el rechazo a la actual relación política colonial y territorial de Puerto Rico con relación a Estados Unidos; en segundo lugar, la afirmación mayoritaria del electorado en nuestro país reclamando igualdad de derechos como ciudadanos estadounidenses, solicitando a su vez la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión.

Invocando las disposiciones de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Congreso de Estados Unidos de 2014, la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 pretendía que el Secretario de Justicia de Estados Unidos autorizara el uso de los \$2.5 millones allí consignados para efectuar una consulta plebiscitaria inicial, a tener efecto en Puerto Rico el 11 de junio de 2017.

Indicaba la Ley como fue inicialmente aprobada por el Gobierno de Puerto Rico, que las propuestas de estatus que se incluirían en la

consulta serían opciones permanentes, no territoriales y no coloniales; que cumplirían con lo requerido por la *referida Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014*; y que no serían incompatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de Estados Unidos, incluyendo las obligaciones asumidas por Estados Unidos ante las Naciones Unidas en materia del derecho de los pueblos de los territorios a escoger su relación futura con la potencia administradora, incluyendo la libre asociación y la integración. Así las cosas, la Ley para la Descolonización Inmediata de 2017 postula una primera consulta donde el elector escogería entre dos opciones, la estadidad o la “Libre Asociación/Independencia”, como si ambas fueran sinónimos, cuando existen claras y marcadas diferencias entre ambas.

Disponía, además la Ley que, si prevaleciera en la primera consulta la estadidad, de inmediato se solicitaría mediante petición la transición hacia la integración de Puerto Rico como un estado de la Unión; si prevaleciera la segunda opción, entonces se llevaría a cabo una segunda consulta, a tener lugar en el mes de octubre de 2017, entre las opciones de libre asociación e independencia.

Es importante señalar que la Ley mencionaba elementos que cargaban el peso del voto a favor de la estadidad. Tal es el caso del manejo del tema de la ciudadanía, impulsando el elemento de que es sólo bajo tal estatus, como único se garantiza la ciudadanía estadounidense, lo que contrasta con lo indicado en el Informe de Casa Blanca de 2011, en el cual se señala que esto es un asunto sujeto a acordar entre las partes en un Pacto de Libre Asociación; o incluso, que tal ciudadanía constituye una garantía para aquel o aquella que a la fecha de la independencia o libre asociación ostente tal ciudadanía.

Sobre este tema es importante señalar que la tenencia de la ciudadanía estadounidense a la fecha en que se opere un cambio en la relación política de ambos pueblos, ya sea a partir de una independencia, está también planteado la posibilidad de transmitir la misma a generaciones futuras conforme a actual estado normativo prevaleciente en Estados Unidos. Igualmente ocurre cuando menciona lo relacionado a la Libre Asociación y el tema de la ciudadanía estadounidense, cuando se proyecta el tema desde una perspectiva de inseguridad en retener la misma y no desde la premisa que establece al presente el estado de derecho en Estados Unidos.

En el caso de la opción de Independencia, dejaba en manos del Congreso, de manera unilateral, la aprobación de legislación que definiera el tránsito hacia la independencia. Tampoco disponía la obligación al Gobierno de Estados Unidos con la transferencia previa de poderes a Puerto Rico, para desde el ejercicio de tal transferencia, de soberano a soberano, iniciar las negociaciones pertinentes en el período de transición que se definiera por las partes.

Es evidente que en un proceso en el cual al presente un sector del Partido Popular dice no sentirse representado por las alternativas que estarían sujetas a votación, que deben ser varios cientos de miles de populares, este sector también quedaba fuera del proceso lo que ya le asegura al PNP una mayoría de la consulta. Con ella se proponían iniciar, en virtud de una “Comisión de Transición” que establecía el proyecto, su agenda de impulsar ante el Congreso, en plena sintonía con el proyecto de ley radicado por la Comisionada Residente al comienzo del presente Congreso, su petición de estadidad.

Para quienes participaran de la consulta el reclamo sobre el cual votarían establecía lo siguiente:

“RECLAMO al Gobierno de los Estados Unidos la reparación del agravio territorial y colonial durante 119 años, excluyendo a Puerto Rico de cualquier modalidad o interpretación jurídica de la ‘Cláusula Territorial’ de la Constitución Federal y con la implantación de la alternativa de estatus político final, permanente, no territorial y no colonial...”

Es importante señalar que en la Ley se invoca la Resolución 1541 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, pero guarda total silencio y omite toda referencia a la Resolución 1514 (XV) de dicho Organismo y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 (XXI) de 1966 y en vigor desde 1976.

El 13 de abril de 2017, Dana J. Boente, “Acting Deputy Attorney General” de Estados Unidos escribió al Gobierno de Puerto Rico rechazando, por considerarla incompatible con las políticas de Estados Unidos, la manera en que había sido redactada la papeleta para la consulta plebiscitaria. Rechazó específicamente la omisión de la

presente condición territorial como una de las opciones a ser incluidas en la papeleta. La carta cuestiona, además, el resultado de la consulta de 2012 sobre la opción de estadidad por considerarla “incierta”; rechazando que se diga que solamente bajo la estadidad es que estaría asegurada la ciudadanía estadounidense por nacimiento para los puertorriqueños. Consideró también que la manera en que estaba fraseada la fórmula de “libre asociación”, podría llevar al elector a creer que es posible la ampliación del Estado Libre Asociado fuera de la Cláusula Territorial.

Como resultado de lo anterior, el gobierno de Puerto Rico tuvo que enmendar la Ley para incluir en la consulta de 1 de junio de 2017 el “ELA territorial” como una opción de estatus a considerar en la consulta, así como hacer los otros ajustes requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La inclusión del “ELA territorial” en la papeleta trajo como resultado la decisión por parte de las organizaciones que impulsaban la libre asociación de boicotear la consulta que se habían comprometido antes a participar. Lo mismo ocurrió con el Partido Independentista Puertorriqueño y otras organizaciones y sectores independentistas que se proponían defender la opción de la independencia en la papeleta, y a nivel mayoritario, con los seguidores del Partido Popular Democrático.

La inconformidad del Gobierno de Estados Unidos con el proceso seguido en Puerto Rico se manifestó en el hecho de que, apenas poco más de dos semanas antes de la fecha para efectuar la consulta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se había expresado aprobando la nueva papeleta a ser utilizada en la consulta, ni se habían liberado los \$2.5 millones que se contemplaba en la Ley Núm. 113-76, *Consolidated Appropriations Act* de 2014.

Con sólo una escasa participación de un 22% de los electores hábiles para votar, dado el boicot de amplios sectores del país provenientes del independentismo y del sector autonomista y de libre asociación, con todo y la campaña oficial hecha por el partido de gobierno en favor de la estadidad, dicha fórmula obtuvo el respaldo de

poco más de 485 mil electores en un universo de 2.2 millones²¹. Esa y no otra es la razón de que los medios hayan proyectado un apoyo a la estadidad del 97% de los votos. Con tales números, la estadidad como preferencia de estatus de la mayoría de los puertorriqueños quedó deslegitimada tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

El Proyecto de Ley radicado por la Comisionada Residente en Washington, Jeniffer González, para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión en un plazo de una década, estaba sujeto al resultado de la consulta en Puerto Rico y el triunfo de la opción de estadidad. Es improbable que una consulta en la cual a todas luces el sector estadista que participó de la misma lo hizo sin la participación de las otras fuerzas políticas en Puerto Rico, no aportará nada en el reclamo de estadidad que pretende impulsar la consulta en Puerto Rico.

A la vez la Comisionada Residente había sometido su proyecto para la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión, el 6 de febrero de 2017 el congresista Luis Gutiérrez radicó el H. R. 900, titulado *To recognize Puerto Rico's sovereign nationhood under either Independence or free association and to provide for a transition process, and for other purposes.*

En el proyecto se solicita del cuerpo legislativo el reconocimiento de Puerto Rico como una nación soberana, señalando de paso que la estadidad resultaría en detrimento para los puertorriqueños y para Estados Unidos, y que las opciones para la disposición del territorio por parte del Congreso deben limitarse a las alternativas de Independencia o Libre Asociación; la primera bajo un Tratado de Amistad y Cooperación, donde se establezcan relaciones económicas entre ambas naciones; el mantenimiento de la ciudadanía estadounidense por aquellos que la tengan al momento de ser proclamada la independencia y en el caso de aquellos que nazcan posteriormente, mediante un estatus de no inmigrantes con libre tránsito y derecho a

²¹ Un examen del por ciento de votos obtenidos por el Partido Nuevo Progresista en las pasadas tres consultas electorales (2012, 2016 y 2020) reflejan una significativa pérdida de votos a dicho partido promotor de la Estadidad: 2012 obtuvo el 47% de los votos, 2016 obtuvo el 42% de los votos y 2020 obtuvo el 32% de los votos. Igual tendencia al desgaste en votos lo tiene el Partido Popular Democrático con 48% en 2012; 39% en 2016 y 31% en 2020.

trabajar en Estados Unidos; así como las garantías de los derechos adquiridos, particularmente de Veteranos, Seguro Social y Pensiones.

En el caso de la Libre Asociación, el proyecto indica que Puerto Rico contaría con personalidad jurídica como estado soberano, un gobierno propio, no sujeto a la Constitución ni las leyes de Estados Unidos salvo competencias delegadas a dicho país, aunque sujetas a revocación; el derecho de las partes a terminar unilateralmente el pacto de asociación, y la continuación de la ciudadanía estadounidense para los ciudadanos de Puerto Rico.

Un posible escenario era que si el proyecto de ley sometido por la Comisionada Residente lograba algún acceso al debate legislativo en el Congreso de Estados Unidos, ciertamente estaría sujeto a tal discusión teniendo como contrapeso, el proyecto sometido por el Congresista Gutiérrez. Pero si el proyecto de la Comisionada Residente no encontraba espacio en el Congreso, siempre el proyecto de ley del Congresista Gutiérrez podría ser examinado por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, tampoco era descartable, como indicaba el Informe de 20 de diciembre de 2016 del Grupo de Trabajo, que alguna otra iniciativa para atender el estatus de Puerto Rico pueda surgir sin tomar en consideración la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico.

Más adelante se aprobó por parte del gobierno de Puerto Rico la Ley Núm. 30 de 5 de junio de 2017 titulada *Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico*. Con ella se propuso la creación, como medida transitoria, de una “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico”, adscrita a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, constituida por la primera delegación de dos Senadores y cinco Representantes “federales”. Estos promoverán en el Congreso y el Gobierno federal el cumplimiento del mandato electoral en el plebiscito de 6 de noviembre de 2012 y cualquier otro mandato electoral futuro que sea equivalente, rechazando la actual condición territorial-colonial y reclamando la admisión como un estado de la Unión en igualdad de derechos y

deberes con los ciudadanos de los demás estados; y para otros fines.
22

Mediante la aprobación de esta ley, el Gobernador de Puerto Rico estaría designando unilateralmente una Comisión de siete (7) personas, dos senadores y cinco representantes, los cuales representarán por acumulación al Pueblo de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, sin aval alguno del Congreso de Estados Unidos o de instancia alguna del gobierno de este país, para impulsar el reclamo de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. Al presente, se trata de un esfuerzo anexionista inconsecuente.

Como parte de la Política Pública expuesta en el artículo 3 de dicha Ley, esta Comisión tiene como encomienda comenzar, de manera inmediata a su designación, “un proceso de transición para cesar en Puerto Rico la imposición de cualquier condición territorial y colonial en todas las modalidades e interpretaciones jurídicas del artículo IV, Sección 3, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América, y encaminar a Puerto Rico, en el menor plazo posible, a la igualdad de derechos y deberes de un estado de la Unión bajo la Constitución de los Estados Unidos de América”.

Se trata, en efecto, de tres iniciativas que el partido de gobierno tenía corriendo en forma simultánea: un plebiscito en Puerto Rico efectuado el 11 de junio de 2017 con el resultado antes mencionado, que pretendía ser y no fue un ejercicio de validación del resultado de la segunda consulta en el plebiscito de 2012; un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión en una década, que es el radicado por Comisionada Residente en Washington; y finalmente, un proyecto aprobado en Puerto Rico para selección dos senadores y cinco congresistas, cuya función sería forzar, utilizando el precedente del *Plan Tennessee*, la incorporación de Puerto Rico como estado de la Unión por parte del Congreso de Estados Unidos.

Estas iniciativas del sector estadoista en Puerto Rico se desarrollan en momentos en que el país está bajo el Capítulo III de la Ley PROMESA, donde se debate ante una jueza federal designada por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos el proceso de insolvencia del gobierno, las corporaciones públicas y los sistemas

²² La Ley fue objeto de enmiendas en los años 2017 y 2020.

de retiro y su capacidad para asumir el pago de sus deudas; en momentos en que una Junta de Control Fiscal creada por dicha Ley ha asumido el control de la vida política de los puertorriqueños; y en una coyuntura donde ni los sectores del Partido Demócrata en Estados Unidos, mucho menos del Partido Republicano, tienen dentro de su radar o zona de interés al pueblo puertorriqueño.

El 30 de diciembre de 2020 fue aprobada la Ley Núm. 167 para llevar a cabo un proceso de elección especial para escoger dos (2) delegados especiales al Senado de los Estados Unidos y cuatro (4) delegados especiales a la Cámara de Representantes federal para exigir del Congreso que se respetara el mandato electoral a favor de la Estadidad y que se admita a Puerto Rico como un estado de la Unión.

Ninguna de estas iniciativas ha arrojado nada positivo para el sector estadista en Puerto Rico.

Al anterior contexto debemos señalar el estado en que ha venido a menos el país como resultado del paso de los huracanes Irma y María, en los cuales el gobierno de turno ha mostrado su peor y más insolvente cara en el manejo de la emergencia provocada por estos huracanes, y su incapacidad para atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo.

Si antes era urgente atender el problema de falta de poderes políticos para atender la solución de nuestros asuntos más urgentes, el presente nos plantea la imperiosa necesidad de hacerlo. Las herramientas que ofrece la soberanía para un pueblo son los instrumentos necesarios para abordar la solución de los mismos, ello dentro del más amplio escenario de justicia social, equidad y distribución de la riqueza que como pueblo generamos. Sin soberanía, será imposible por Sísifo empujar la piedra al tope de la montaña.

X. Resumen de los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos a partir de 2006:

En los sucesivos gobiernos del PNP se han promovido consultas al electorado procurando una expresión favorable a la estadidad, algunas de ellas mediante proyectos de ley radicados ante el Congreso de los Estados Unidos. Otras iniciativas provenientes de otros sectores

no necesariamente partidistas, también se han presentado tanto en la Cámara como en el Senado federal. A continuación presentamos la lista de los distintos proyectos relacionados con el estatus de Puerto Rico a partir del 2006 en el Congreso y Senado de los Estados Unidos:

1. (S. 2304): Puerto Rico Self-determination Act de 16 de enero de 2006 (Kennedy y Lott)
2. (H.R. 4867): Ley de la Democracia en Puerto Rico de 21 de febrero de 2006 (Luis Fortuño)
3. (S. 2304) de 16 de febrero de 2006: propuso vincular al Congreso con una Convención Constitucional de Estatus que estableciera los mecanismos de libre determinación (Richard Burr)
4. (H. R. 4963): Puerto Rico Self-determination Act de 15 de marzo de 2006 (Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez).
5. (H. R. 4963) de 15 de marzo de 2006: propuso vincular al Congreso con una Convención Constitucional de Estatus que estableciera mecanismos de libre determinación (John Duncan)
6. (H. R. 1230) de 28 de febrero de 2007: reconociendo el derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea Constitucional de Estatus para ejercer la libre determinación a ser aprobada mediante Resolución por el Congreso (Nydia Velázquez)
7. (H. R. 2000) de 5 de mayo de 2013 proponiendo referéndum federal donde los puertorriqueños indiquen si quieren la admisión como un estado y si mayoría absoluta votaba a favor, el presidente tenía que presentar legislación para la admisión de Puerto Rico como estado (Pedro Pierluisi)
8. (S. 2020) de 12 de febrero de 2014 convocando a un referéndum Estadidad Si o No (Martin Heinrich, Rohn Whyden, y Brian Shatz)
9. (H. R. 727) de 4 de febrero de 2015 convocando a referéndum estadidad Si o No. Si se votaba a favor, el presidente debía iniciar un proceso de transición hacia la estadidad efectivo a enero de

2021 y creación de una comisión para aprobar las leyes necesarias al cambio. (Pedro Pierluisi)

10. (H. R. 260) de 4 de enero de 2017 proponiendo un lenguaje similar al de 2014 con un proceso de admisión de Puerto Rico como estado (Jennifer González)
11. (H. R. 900) de 6 de febrero de 2017 *“To recognize Puerto Rico’s sovereign nationhood under either Independence or free association and to provide for a transition process, and for other purposes”* (Luis Gutiérrez)
12. (H. R. 6246) de 27 de junio de 2018 proponiendo incorporar a Puerto Rico como territorio y creando Grupo de Trabajo del Congreso para rendir informe efectivo a enero de 2021 para la admisión de Puerto Rico como estado. (Jennifer González)
13. (H. R. 1965) de 28 de marzo de 2019 para la admisión de Puerto Rico en un plazo de 90 días, sin consulta federal (Darren Soto y Jennifer González)
14. (H. R. 4901) de 29 de octubre de 2019 para incorporar a Puerto Rico como territorio si se votaba a favor de la estadidad en consulta de 3 de noviembre de 2020 con plan de transición de 30 meses. (José Serrano)
15. (H. R. 8113) de 25 de agosto de 2020 titulado Puerto Rico Self-determination Act a través de una convención constitucional de estatus (Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez)
16. (H. R. 1522) de 2 de marzo de 2021 proponiendo un proceso de admisión resultante de referéndum estadidad Si o No. (Darren Soto y Jennifer González)
17. (S. 870) de 16 de marzo de 2021 proponiendo un proceso de admisión resultante de referéndum estadidad Si o No. (Martin Henrich)
18. (H. R. 2070) Puerto Rico Self-determination Act de 2021 de 18 de marzo de 2021 reconociendo el derecho a auto convocarnos

en Asamblea de Estatus para ejercer el derecho a la libre determinación y creando comisión negociadora por la parte estadounidense. (Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez)

19. (S. 865) Puerto Rico Self-determination Act de 2021 de 18 de marzo de 2021 reconociendo el derecho a auto convocarnos en Asamblea de Estatus para ejercer el derecho a la libre determinación y creando comisión negociadora por la parte estadounidense.

Ciertamente, ninguna de estas medidas legislativas ha fructificado en los cuerpos legislativos federales, ni los Estados Unidos ha adoptado como gobierno una política pública descolonizadora para Puerto Rico. De igual manera, los Informes rendidos por el Grupo de Trabajo Interagencial de Casa Blanca tampoco han producido nada, más allá de posibles escenarios, sin resultado alguno.

Como se desprende del listado anterior, al presente se encuentran radicados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos varias iniciativas relacionadas con el estatus de Puerto Rico. Las dos de mayor atención, son la promovida por la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González y el congresista de origen puertorriqueño por el distrito número 9 en la Florida, Darren Soto, donde se plantea una petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.

Se encuentra también radicados en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos otras iniciativas en torno a un mecanismo procesal para el ejercicio de la libre determinación por parte del pueblo puertorriqueño promovidas, en la Cámara de Representantes por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez; y en el Senado, por el Senador Roberto (Bob) Menéndez. Estas iniciativas presentan una propuesta en la cual, en conjunto con la contraparte estadounidense, se promovería el diálogo entre las diversas corrientes de pensamiento político en Puerto Rico en torno al estatus, así como la producción de fórmulas de relaciones políticas futuras con los Estados Unidos y de negociación, para viabilizar la solución de las actuales relaciones políticas entre ambos pueblos fuera de la condición territorial que impone el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos hacia sus territorios y propiedades.

La propuesta ante la consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en el P. de la C. 5 es posiblemente la que mayor armonía guarda con las propuestas conocidas como Puerto Rico Self-determination Act. Veamos la discusión, antecedentes y evolución de las propuestas que hoy se han presentado en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos bajo el título *Puerto Rico Self-determination Act of 2006 y 2021*.

a. H. R. 4963 y S. 2304: Puerto Rico Self-determination Act of 2006:

El 15 de marzo de 2006, por iniciativas de la congresista Nydia Velázquez junto a los congresistas Luis Gutiérrez y José Serrano, bajo el número H. R. 4963, fue radicado un proyecto de ley titulado *Puerto Rico Self-determination Act of 2006*. A su vez el 16 de febrero de 2006, otra medida con igual propósito e igual nombre fue radicada en el Senado de los Estados Unidos por los Senadores Edward Kennedy, Trent Lott y Roberto (Bob) Menéndez bajo el número S. 2304. Ambas iniciativas contaron con el endoso de varios congresistas y senadores republicanos.

En las medidas, el Congreso y Senado de los Estados Unidos reafirmaban la “autoridad inherente” del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de “convocar”, y así se autorizaba expresamente, “una convención constitucional por medio de delegados electos con el propósito de establecer un mecanismo a través de la cual el pueblo de Puerto Rico pueda ejercitar su derecho a la libre determinación y establecer un mecanismo para la libre determinación.”

Los proyectos contemplaban como opciones “un nuevo o enmendado pacto de asociación” que sustituyera el presente bajo la Ley 600-1950; la admisión de Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos y la declaración de la independencia.

El proyecto contemplaba, además, que una vez aprobada por la convención constitucional una “opción de libre determinación” ésta se sometería al Congreso para su aprobación. Aprobada la propuesta de libre determinación, con o sin modificaciones por el Congreso, ésta se sometería mediante referéndum al pueblo del Puerto Rico para su

aprobación o rechazo. De ser refrendado mediante referéndum el método de asamblea, el Congreso aprobaría a su vez una resolución conjunta aprobando los términos de la propuesta y su implantación. Si la opción de libre determinación no fuera aprobada por el pueblo de Puerto Rico o por el Congreso, se convocaría una nueva convención constitucional y se elegirían nuevos delegados para someter ante el Congreso una nueva propuesta. La convención constitucional seguiría sesionando hasta que una propuesta de libre determinación fuera aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos.

Las medidas no fueron aprobadas ni por el Congreso ni por el Senado de los Estados Unidos.

b. H. R. 8113: Puerto Rico Self-determination Act de 2020:

El 25 de agosto de 2020 fue radicado por iniciativa de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez un nuevo proyecto de ley, titulado *Puerto Rico Self-determination Act of 2020*.

Al igual que los proyectos de 2006, la medida parte de dos premisas esenciales:

(a) reconocer el derecho del pueblo de Puerto Rico a convocar una convención de estatus como parte del ejercicio del derecho natural a la libre determinación; y

(b) reconocer el derecho a establecer un mecanismo para que el Congreso reconozca tal determinación.

En sus hallazgos (“findings”) el proyecto radicado menciona los siguientes:

(a) En 1898 los Estados Unidos adquirieron por conquista, en virtud del Tratado de París, a Puerto Rico, Guam y Filipinas.

(b) En 1900, bajo la Ley Foraker, se estableció un gobierno civil. La Ley estableció un Consejo Ejecutivo, consistente en varios departamentos y un Comisionado Residente que representa la Isla en el Congreso.

- (c) En 1901 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dispuso que Puerto Rico pertenece, pero no forma parte de los Estados Unidos. El Juez White, en Opinión Concurrente, sostuvo que el Congreso tiene la discreción de decidir si incorpora o no a Puerto Rico como un territorio.
- (d) El Congreso reconoció mediante la Ley 600-1950 la autoridad de Puerto Rico para gobernar sobre sus asuntos internos. En tal virtud, proveyó para organizar un gobierno constitucional que el Congreso adoptó como un convenio (“compact”) y luego ratificó la Constitución en julio de 1952.
- (e) El 18 de noviembre de 1953 las Naciones Unidas reconocieron, bajo la Resolución 748 (VIII) de la Asamblea General a Puerto Rico como una entidad política con gobierno propio.
- (f) Estados Unidos tiene el deber legal de cumplir con el Artículo 1 del *Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos* que establece el derecho de todo pueblo a su libre determinación y en “virtud de tal derecho, a determinar libremente su estatus político, y procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
- (g) La convención de estatus provee el espacio deliberativo comprensivo e ininterrumpido de diálogo para definir el futuro de Puerto Rico.

Sobre la convención de estatus que define la medida se señala lo siguiente:

- (a) La asamblea legislativa de Puerto Rico tiene la autoridad inherente para convocar una convención de estatus constituida por delegados a ser determinados por legislación aprobada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de proponer al Pueblo de Puerto Rico una opción de libre determinación. Las deliberaciones del cuerpo serían semipermanentes, sujeta dicha Convención a disolución sólo cuando los Estados Unidos ratifique una opción de libre

determinación presentada por la Convención al Congreso. Indica, además, que los delegados serán electos por los votos de los puertorriqueños en una elección acorde con la legislación aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

(b) Señala que el Tesoro de Estados Unidos separará un fondo, conocido como “Puerto Rico Status Convention Public Matching Fund”, que será administrado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, sujeto a la Junta Federal de Elecciones, donde se le distribuirá \$4.00 a cada candidato a delegado por cada \$1.00, si la contribución a la campaña que el candidato reciba es menor de \$100.00; y es donado por un residente de Puerto Rico. Se establece en la Ley los requisitos para el pareo de fondos. Se establece para ello separar en dicho fondo la suma de \$5.5 millones.

(c) Finalmente indica que los delegados electos, en consulta con la llamada “Comisión Bilateral Negociadora del Congreso”:

(1) debatirán y redactarán definiciones de opciones de libre determinación para Puerto Rico fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos;

(2) establecerán los correspondientes planes de transición para las opciones de libre determinación; y

(3) escogerán una opción con su correspondiente plan de transición, para presentarlas al Pueblo de Puerto Rico en referéndum.

El proyecto de ley establece, al crear la “Comisión Negociadora Congressional Bilateral”, que ésta será responsable de:

(a) Proveer consejo y consultas a los delegados de la Convención de Estatus.

(b) Los integrantes de la Comisión incluirán:

- (1) los presidentes del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía del Senado;
- (2) los integrantes de mayor rango de los Comités de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía y Recursos Naturales;
- (3) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes;
- (4) un miembro seleccionado por el líder de la minoría de la Cámara de representantes;
- (5) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría del Senado;
- (6) un miembro seleccionado por el líder de la minoría del Senado;
- (7) el(la) Comisionado(a) Residente de Puerto Rico; y
- (8) con el consentimiento del Portavoz de la mayoría de la Cámara de Representante y de la mayoría del Senado, un miembro del Departamento de Justicia;

Los deberes y las funciones de la Comisión son definidos en el proyecto de ley como los siguientes:

- (a) Realizar reuniones periódicas con los delegados en Puerto Rico y en el Distrito de Columbia a petición de los delegados.
- (b) Autoridad para estudiar, realizar hallazgos y formular recomendaciones sobre diferentes opciones de libre determinación en *issues* constitucionales y políticas relacionadas con la cultura, idioma, sistemas de educación, justicia e impuestos, ciudadanía estadounidense, y ayuda y asistencia técnica, así como consejo constitucional a los delegados por el tiempo de duración de la Convención de Estatus.

- (c) Llevar a cabo, a solicitud de los delegados, vistas públicas relacionadas con aspectos de la Convención.
- (d) Recibir testimonios.
- (e) La Comisión deberá proveer con no menos de tres meses periódicamente al Portavoz de a la Cámara de Representantes y al Senado informes sobre el estatus, hallazgos y estudios, y al menos cada 12 meses a la Cámara de Representantes y al Senado informes sobre el estatus, los que hará disponibles en idioma inglés y español en el mismo día en que los informes se sometan al público en general.

Con relación al “Referéndum sobre Estatus” en Puerto Rico que contempla el proyecto, se indica:

- (a) El voto en un referéndum por parte de los residentes de Puerto Rico será llevado a cabo de manera que se pueda expresar las preferencias de los electores en un formato sin límites en cuanto al número de opciones; y donde las definiciones y plan de transición de libre determinación sean las que presentaron los delegados electos y donde se pueda incluir más de una opción, con la misma definición pero con un plan de transición distinto, como se presentó ante los delegados en la Convención de Estatus.
- (b) Se autoriza la suma de \$2.5 millones para llevar a cabo el mismo.
- (c) Si el referéndum es aprobado por el Pueblo de Puerto Rico, el Congreso aprobará una Resolución Conjunta para ratificar la “opción de libre determinación” que se apruebe al amparo de esta Ley. Si el Congreso culminara sus trabajos antes de que se actúe sobre la “opción de libre determinación”, la Convención de Estatus de Puerto Rico creada bajo esta Ley se reunirá nuevamente y reenviará la “opción de libre determinación” al nuevo Congreso.

Me parece que al examinar la propuesta de Velázquez y Ocasio Cortez presentada el día 25 de agosto de 2020, existen aspectos positivos superiores a los que recogía el proyecto de 2006 al que hicimos referencia y que en el marco de ese análisis vale la pena señalarlos. Al hacerlo debemos tomar en consideración que se trata de una medida radicada en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, donde todo trámite legislativo tiene sus complicaciones procesales y en el caso de un proyecto de esta naturaleza, también sus obstáculos sustantivos. Veamos tales elementos positivos o negativos:

- (a) Creo que es importante el reconocimiento que hace la medida legislativa del derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea de Estatus y a establecer nosotros el mecanismo procesal que lleve al Congreso a reconocerlo. Si bien en la nueva propuesta se quita en el nombre de asamblea lo de "constitucional", eso no es un detalle determinante. Se puede señalar que es mucho más importante que sea el método de "asamblea" o "convención", aquel sobre el cual los puertorriqueños se expresen al inicio del proceso con el voto, que lo que pueden ser los "plebiscitos" no vinculantes, retomando así un concepto que, además, está presente en la histórica constitucional de Estados Unidos en el desarrollo de sus Congresos Continentales. La propuesta procesal de convención es, además, el método idóneo para, en conjunto, los distintos sectores ideológicos en nuestro país en materia de estatus, deliberar, acordar entre nosotros las opciones de libre determinación teniendo a nuestro alcance el mecanismo de negociar a nombre del Pueblo de Puerto Rico mediante delegados electos, con el Congreso de Estados Unidos.
- (b) En el proyecto de 2020, el uso de los términos "opciones de libre determinación" y "planes de transición para las opciones de libre determinación" (en plural), que se plantea para el proceso de debate y redacción de los delegados, aparentaba chocar en su redacción con la indicación de que se someterá al Congreso la "opción de libre determinación" (en singular).

Con relación a esta redacción de la propuesta de 2020 se podía interpretar, pero no está así de claro, que la primera instancia se refería al proceso inicial de parte de los delegados entre sí de definir las opciones; y el segundo, una vez en el proceso de negociación se fueran decantando las opciones frente a Estados Unidos, la que quedara sería la que se sometería por la Convención de Estatus a la consideración del Congreso.

Procurando encontrar una racionalidad política en la propuesta en el uso de los términos “opciones” y “la opción”, podría interpretarse que se consideraron las opciones bajo el siguiente prisma: En el caso de la independencia, se consideró que no contaría con el apoyo mayoritario de los puertorriqueños, mientras que en caso de la estadidad, se consideró que no contaría con el apoyo de las estructuras de gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es decir, descartando los dos extremos, “Independencia” y “Estadidad”, la intención en el proyecto podría ser mover o timonear el proceso en Puerto Rico hacia un escenario de Libre Asociación como “opción de libre determinación”.

Esta premisa, sin embargo, tiene su dosis especulativa, por lo que necesariamente era y en efecto fue el objeto de reevaluación en el proyecto presentado en el 2021.

- (c) La medida insistía y todavía insiste en señalar que en 1952 hubo un "convenio" en virtud del cual el Congreso ratificó la Constitución, cuando la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso de *Pueblo v. Sánchez Valle*, hace referencia a la posición de la Procuradora de Justicia de los Estados Unidos señalando que lo que significa el mencionado "convenio" no es el que se nos ha dicho. De acuerdo con sus expresiones, el llamado “convenio” se reduce a que nosotros los puertorriqueños aceptamos mediante referéndum el ofrecimiento del Congreso bajo la Ley 600-1950 legislando autorizando un referéndum para la convocatoria a una

“convención constitucional” y elegir delegados responsables de elaborar una Constitución para organizar un gobierno propio en asuntos estrictamente locales, en forma republicana, con separación de poderes y una Carta de Derechos y nosotros, en efecto, autorizamos la misma, sujeta a revisión y aprobación por el presidente de los Estados Unidos y el Congreso.

Veo, sin embargo, como elemento positivo, que el proyecto de 2020 omite en cuanto a “opciones de libre determinación” la referencia a un “nuevo ELA” o a un Estado Libre Asociado “nuevo o modificado”.

- (d) Es positivo el reconocimiento del "deber" que tiene los Estados Unidos de cumplir con el *Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos*. Este dato no se recoge en las Resoluciones del “Comité de Descolonización de las Naciones Unidas” sobre Puerto Rico. El Pacto impone a los países signatarios el reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos, a establecer libremente su condición política y promover su desarrollo económico, social y cultural; al cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas, y con las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refieren en dicho Pacto.

(e) Es positivo que se señale el carácter "comprensivo e ininterrumpido de diálogo" a desarrollarse entre la Convención de Estatus y el Congreso "para definir el futuro político". Es importante, además que se indique que si el Congreso concluye su término sin acordar la "opción de libre determinación", la Convención de Estatus se reuniría nuevamente y reenviaría la opción de libre determinación al nuevo Congreso. Esto salvaría que la iniciativa muera cuando finalicen los dos años que dura cada Congreso bajo el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos.

(f) Es positivo que se señale en la medida que los delegados elaborarán, no solo las opciones de libre determinación, sino también los planes de transición en cada una.

(h) Es positivo en el caso de Estados Unidos, que la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral” involucre a los presidentes en Cámara y Senado de los Comités de Energía y Recursos Naturales y Energía respectivamente; a los demás funcionarios mencionados de la Rama Legislativa; y que la representación del representante Departamento de Justicia en esta Comisión, se decida con “el consentimiento” del Portavoz de la Cámara y del líder de mayoría del Senado.

(i) Es positivo que el Proyecto determine los deberes y funciones de la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”.

(j) Me parece que también es positivo que el Proyecto disponga que la “opción de libre determinación” que será sometida a los puertorriqueños, será aquella que haya sido escogida por los delegados a la Convención de Estatus. Esto evita que el Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervenga con el contenido de la consulta.

c. La activación del Grupo Interagencial de Casa Blanca

De acuerdo con el periodista José Delgado, en publicación hecha por el periódico *El Nuevo Día* 19 de enero de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió activar una vez más, a nivel de Casa Blanca, el Grupo Interagencial sobre Estatus. En el ejercicio de sus facultades, Biden designó en aquel momento como encargada de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales a la puertorriqueña Gretchen Sierra Zorita. Esta funcionaria provenía de la entidad denominada “Equality America”, la cual ha promovido la igualdad en los derechos para los residentes en los territorios estadounidenses que disfrutan los ciudadanos de los estados de la Unión. Sierra Zorita, participante activa del Partido Demócrata y de la campaña presidencial de Joe Biden, había estado también vinculada a la agrupación “Agenda Nacional

Puertorriqueña” y al “Centro de Estudios Hispanos” del Hunter College. Durante la administración del presidente Clinton, trabajó en una posición de confianza dentro de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés.

La designación de Sierra Zorita contó con el endoso del Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su convocatoria a vistas públicas sobre el proyecto de la Comisionada Residente y el de las Congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, Grijalva solicitó del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se expresara en torno a estas medidas.

d. H. R. 2070 y S. 865: Puerto Rico Self-determination Act of 2021:

Al igual que ocurrió con las medidas radicadas en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos durante el pasado año bajo este mismo título, en esta ocasión una versión enmendada fue radicada en ambas cámaras legislativas.

En la nueva propuesta, bajo los números H. R. 2070 y S. 865, se reflejan varios cambios de importancia:

- (a) Al referirse a las “opciones” (en plural), mantiene el principio de que sean “opciones de libre determinación” también en plural y no en singular, las que se le presentarán al pueblo para que vote sobre ellas en referéndum, requiriendo sean fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución federal.
- (b) El proyecto propone que, además de un representante del Departamento de Justicia designado con el consentimiento de la mayoría de Cámara y del Senado para participar en la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”, también se incorpore en la misma bajo similares términos un representante del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Esto le daría una mayor participación a la Rama Ejecutiva en dicho organismo.²³

²³ Se ha planteado por personas como el ex senador José Ortiz Daliot, integrante de ALAS, organización que promueve un Pacto de Libre Asociación Soberana entre

- (c) Se toma en consideración, en la participación de los integrantes de la Comisión Negociadora Bilateral Congressional que serían designados por los líderes de la mayoría y minoría en dichos cuerpos a los puertorriqueños en la diáspora al indicar que deben provenir, conforme al Censo, de uno de los 10 estados o distritos con mayor población identificada como puertorriqueña.
- (d) Sustituye la expresión genérica de que la Comisión Negociadora Bilateral deberá informar a la Cámara y al Senado a través de sus portavoces periódicamente sus hallazgos y estudios, por un mandato de que dichos informes deberán ser al menos trimestrales; y al pleno de la Cámara y el Senado se rendirán informes anuales sobre el estatus.
- (e) Dispone que en el proceso de someter en referéndum a los residentes de Puerto Rico las opciones de estatus, deberán ser “en un formato sin límites en el número de opciones con su plan de transición; y también contempla el escenario de que una misma opción con la misma definición, cuente con distintos planes de transición.
- (f) Indica que los delegados llevarán a cabo una campaña educativa a través de medios tradicionales; autoriza a la Comisión Estatal de Elecciones y le asigna \$5 millones para que los haga disponibles en partes iguales a las opciones de libre determinación que concurran al referéndum.
- (g) Se regula el rendimiento de informes trimestrales a la Comisión Federal de Elecciones por parte de los delegados sobre las campañas educativas que lleven a cabo.

Puerto Rico y los Estados Unidos, una propuesta que a nuestro juicio sería positiva, que es que en dicha Comisión Negociadora Congressional Bilateral, también se incorpore alguien que represente la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La pertinencia y razonamiento de la propuesta reside en el hecho de que, en el caso de las opciones de independencia y libre asociación, la relación política futura se regiría por el mecanismo de Tratados entre la nueva entidad política que surja y los Estados Unidos.

- (h) Indica que si el referéndum bajo esta ley es aprobado por el pueblo de Puerto Rico, el Congreso deberá aprobar una resolución para ratificar la opción de libre determinación aprobada en el referéndum. Si cuando termine el Congreso éste ha dejado de actuar sobre el resultado de la votación, la convención constitucional de estatus se reunirá nuevamente para remitir al siguiente Congreso las opciones de libre determinación.²⁴
- (i) Indica que la resolución conjunta debe ser introducida dentro de los 10 días de haberse ratificado por la Comisión Estatal de Elecciones el resultado del referéndum. Esta se referirá al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y al Comité de Energía del Senado de los Estados Unidos. Si el Comité al cual se refiere la certificación no informa de la resolución o de otra similar dentro del término allí dispuesto para ello, la resolución será puesta en el calendario del cuerpo correspondiente para su consideración.
- (j) La medida contempla mecanismos específicos para la discusión de la resolución conjunta cuando se limite o torpedee el proceso para pasar juicio y decidir sobre la opción de libre determinación escogida por los puertorriqueños.

Ciertamente no existen proyectos de ley perfectos, mucho menos si son el producto de la búsqueda de consensos entre diferentes puntos de vista en torno a cómo atender situaciones especiales; en nuestro caso particular, en un tema que tanto divide al pueblo puertorriqueño, pero que a su vez reconocemos, es imperativo atender y resolver.

El proyecto de ley que promueven las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez tiene también la anterior característica. Sin embargo, un examen de las medidas radicadas entre 2006 y el presente para atender procesalmente el tema del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño; y de que los Estados Unidos asuman su

²⁴ Aquí el lenguaje resulta confuso dado el hecho de que en el párrafo hace referencia a que se enviará al Congreso la “opción” (en singular) que resulte aprobada en el referéndum y luego, cuando hace referencia a qué se enviará al siguiente Congreso si el que venció dejó de actuar, menciona la palabra “opciones” (en plural).

responsabilidad al amparo del derecho internacional y doméstico²⁵ con viabilizar tal ejercicio de libre determinación; de todos los mencionados el que ha llegado más lejos en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, es la propuesta contenida en el *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*.

Como propuesta legislativa, la medida tiene aún la posibilidad de ser mejorada en el proceso de vistas públicas; también tiene el mérito de generar un rico debate, sobre todo confrontando sus elementos positivos frente a otras iniciativa engañosas o pervertidas, dirigidas a que nos cancelemos unos con otros detrás del discurso del estatus para que las cosas sigan iguales, en una relación de subordinación política, sin cambios, sin opciones, sin salidas.

Reconociendo lo complicado que puede resultar la discusión e incluso el entendimiento de la propuesta que nos presentan las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, considero que los 10 elementos más positivos que nos presenta el Proyecto de ley *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*, son los siguientes:

1. Reconoce el derecho de los puertorriqueños a convocar una asamblea de estatus y establecer un mecanismo que lleve al Congreso a reconocerlo.
2. Destaca el método de asamblea como el mecanismo idóneo para, en conjunto, deliberar y negociar a nombre del Pueblo de Puerto Rico con el Congreso de Estados Unidos y representantes de su Rama Ejecutiva.

²⁵ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966 (Resolución 2200 (XXI)), que entrara en vigor el 23 de marzo de 1976 y que fue ratificado por los Estados Unidos en 1992, indica en su Artículo 1, Parte I, lo siguiente:

“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”

Habiendo sido ratificado por los Estados Unidos dicho Pacto, forma parte de su normativa legal y como tal forma parte de lo que dicho país reconoce como “the law of the land.”

3. Plantea que los delegados electos por los puertorriqueños definirán las “opciones de libre determinación”, las que deberán estar fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y elaborarán para cada una de ellas los planes de transición.
4. Reconoce que los Estados Unidos tienen el “deber” de cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por dicho país en 1992 y forma parte de lo que en el constitucionalismo estadounidense se llama “the law of the land”.
5. La importancia en que consigna el carácter “compresivo e ininterrumpido de diálogo” entre la convención de estatus electa por los puertorriqueños y la “Comisión Negociadora Congressional Bilateral” designada en los Estados Unidos; y que si el Congreso concluyera su término sin acordar “la opción de libre determinación”, la convención de estatus se reunirá nuevamente y reenviará las opciones de libre determinación al nuevo Congreso.
6. La conformación de los integrantes de la Comisión Negociadora Bilateral Congressional de parte de Estados Unidos, incluyendo dirigentes de mayoría y minoría del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara y Senado; la inclusión de una representación del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior de los Estados Unidos; que en la designación de los representantes de minoría y mayoría en ambas Cámaras se tome en consideración que provengan de estados o distritos con alta población puertorriqueña.
7. Define los deberes y funciones de la Comisión Negociadora Congressional Bilateral.
8. Indica que las “opciones de libre determinación” que serán sometidas a los puertorriqueños mediante referéndum serán aquellas escogidas por los Delegados en la convención de estatus.
9. Incorpora el rendimiento de informes trimestrales sobre el desarrollo de los trabajos de la Comisión Negociadora Bilateral a

los directivos e integrantes de los cuerpos y el rendimiento anual de un informe sobre el estatus.

10. La continuidad de las labores de la convención de estatus si el Congreso no actuara durante su vigencia; como también, mecanismos para impedir que no se tome acción por parte de los cuerpos legislativos de los Estados Unidos una vez el pueblo de Puerto Rico se exprese en referéndum sobre las opciones de libre determinación.

Me parece que un elemento de importancia adicional que debemos tener presente, es que esta iniciativa congresional concurre en tiempo con la radicación en Puerto Rico por parte de la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes del P. de la C. número 5. Esta medida, de ser aprobada y promulgada como ley, convocaría a un referéndum donde los electores en Puerto Rico se expresarían a favor o en contra de la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE) para atender el tema de las relaciones políticas futuras de Puerto Rico con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial del Artículo IV, Sección 3 de la Constitución Federal. De así ser aprobada en referéndum la convocatoria a la ACE, se procedería a una segunda elección para la selección de delegados a dicha Convención con la encomienda de deliberar y acordar las definiciones de futuras relaciones políticas con los Estados Unidos sobre bases no coloniales y no territoriales. Los delegados escogerían, a su vez, del seno de la Convención, la representación que mediante una Comisión Negociadora se reuniría para discutir y acordar con los representantes de los Estados Unidos aquellas fórmulas de relación política que dicha contraparte estadounidense esté dispuesta a acordar, así como sus términos y condiciones, incluyendo la transición hacia cada una de ellas.

XI. Nuevas iniciativas plebiscitarias en Puerto Rico

El 16 de mayo de 2020 fue aprobada la *Ley para la Definición del Estatus Político de Puerto Rico* en virtud del cual se sometió a la consideración de electorado, en conjunto con las elecciones de noviembre de 2020, el voto a favor o en contra de la Estadidad.²⁶ En la

²⁶ A pesar de que la Ley formula la propuesta de que se trata de un plebiscito, la realidad de una consulta a favor o en contra de una propuesta, convierte la misma en un referéndum y no en un plebiscito. En el primero, el elector se expresa a favor

consulta, de un total de 2,355, 894 electores inscritos, con una participación de 1,289,135 electores, 655,505 se expresaron en favor de la Estadidad y 592,621 se expresaron en contra.

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley Núm. 167 titulada *Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico*. Mediante esta se llevó a cabo una elección especial en Puerto Rico para elegir dos (2) delegados especiales al Senado de los Estados Unidos y cuatro (4) delegados especiales a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar a Puerto Rico ante el Congreso y requerir que “se respete el mandato electoral a favor de la Estadidad y que se proceda a admitir a Puerto Rico como un Estado de los Estados Unidos de América.” Estos delegados, al igual que la Comisión por la Igualdad, han sido inconsecuentes desde el punto de vista del adelanto de su agenda de trabajo para los cuales fueron seleccionados. Al presente, incluso el gobierno de Puerto Rico por conducto de su Departamento de Justicia ha tenido que iniciar el proceso para eliminar una de las personas electas, y ciertamente, el país cuestiona las ejecutorias de los demás integrantes de la mencionada Delegación.

XII. A manera de reflexión final

Si comenzamos este escrito exponiendo al lector el drama de Sísifo narrado en la mitología griega y el tormento al cual le condenaron los dioses del Olimpo, es porque es lo más parecido que podemos encontrar en la condena al cual el tribalismo político en Puerto Rico, alimentado por cierto por la potencia que nos impone la condición territorial y colonial, nos condena como pueblo.

El Maestro Eugenio María de Hostos, en su propuesta de la Liga de Patriotas, articulada el 22 de diciembre de 1898 mientras era acordada la disolución de la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, nos convocó como pueblo a reclamar de los Estados Unidos el respeto a la personalidad jurídica de Puerto Rico; formuló más adelante un plan a tales fines; abogó en sus escritos de comienzos del pasado Siglo para que Puerto Rico no fuera ocupado por una fuerza militar; que se consultara al pueblo sobre su voluntad

o en contra de la consulta y su propuesta, en el segundo, el elector se expresa escogiendo una opción entre varias que se le presentan.

mediante el ejercicio del plebiscito; que se constituyera una Comisión de Delegados que recabara del Gobierno de los Estados Unidos el reconocimiento de dicha personalidad; y que Puerto Rico no terminara siendo presa de una guerra que no declaró y de la cual no participó. En su momento, Hostos denunció la cesión de Puerto Rico a los Estados Unidos declarando que España no podía hacer tal cesión ni los Estados Unidos tomar por la fuerza de las armas nuestra Isla, denunciando también que la Ley Foraker de 1900 no hacía más que dar apariencia de legalidad al hecho de la toma por la fuerza armada de los Estados Unidos de nuestra patria.

A su muerte, José de Diego también reclamó el respeto a la personalidad jurídica del pueblo puertorriqueño; denunció al igual que Hostos la nulidad del Tratado de París y reclamó el ejercicio del derecho al plebiscito para determinar el futuro político temporal y permanente de nuestro país en su relación con los Estados Unidos. Años más tarde Don Pedro Albizu Campos también invocaría la nulidad del Tratado de París y abogaría por la convocatoria a una Convención Constituyente²⁷.

Luis Muñoz Marín también contempló en su momento la utilización del método de Convención Constituyente para constituirnos nosotros los puertorriqueños como un Estado soberano. Para ello se utilizó la presentación y aprobación ante la Asamblea Legislativa el 10

²⁷ La convocatoria a una Convención Constituyente en Puerto Rico, según formulada por Albizu Campos, conllevó varios contenidos aunque dirigidos a un mismo fin: la redacción de una Constitución “digna” para el país; la derogación de la Ley Jones sustituyéndola por una constitución que establezca un gobierno responsable solo a nuestro pueblo; la constitución de Puerto Rico como una entidad internacional y ante el Proyecto Tydings, convocar a unos delegados plenipotenciarios para “negociar de igual a igual con Estados Unidos los tratados correspondientes e incidentales a la retirada de sus fuerzas armadas de nuestro territorio nacional”. (Véase diversos escritos publicados por Benjamín Torres en su recopilación titulada *Obras Escogidas, Tomo I* de Pedro Albizu Campos). Albizu promovió entre los partidos políticos en Puerto Rico la formación de un “frente unido pro Convención Constituyente, eligiendo delegados a nivel municipal para mediante una Comisión Conjunta con los Estados Unidos, “resolver todo lo concerniente a la liquidación del régimen norteamericano en Puerto Rico.”

de febrero de 1943 de la Resolución Concurrente Número 1, en la cual se abogó por la abolición del sistema colonial de Puerto Rico.²⁸

No ha habido un solo momento en la historia de nuestro pueblo a lo largo del pasado siglo y el presente donde el tema de la descolonización y el ejercicio por nuestra parte del derecho a la libre determinación no haya estado presente. Se trata de una discusión constante y a la vez necesaria.

Que se desarrolle este debate y discusión de manera simultánea y conjunta en Puerto Rico y Estados Unidos añade un elemento de riqueza al proceso, en la medida en que se socializa y generalizaría un debate sobre opciones y alternativas reales por cada parte, las que se irán decantando en opciones reales de futura relación política y ejercicio de libre determinación. Por esto, la iniciativa de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, como el P. de la C. 5 ante la consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en estos momentos, debemos entenderlas como parte del “proceso” de la discusión y no como un “fin” en sí mismo. En esta etapa, esa y no otra es la mayor ganancia. En este sentido, lejos de colocar piedras en el camino al proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, o al P. de la C. Núm. 5, debemos allanar la ruta para su discusión y aprobación en las respectivas cámaras legislativas en Estados Unidos y entre el pueblo.

Si como parte del proceso se alcanzara un acuerdo convocando al pueblo en referéndum para expresar su preferencia en cuanto al método propuesto de Asamblea Constitucional de Estatus, o de

²⁸ La respuesta a dicho reclamo por parte del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt fue la designación de una Comisión Presidencial para estudiar el asunto dirigida por Abe Fortas. La respuesta a Muñoz Marín fue la siguiente: “The United States wil retain sovereignty over Puerto Rico. The United States Goverment will continue to be supreme in Puerto Rico.”

El 28 de septiembre de 1943, el Congreso recibió el Informe de la Comisión Presidencial donde destaca la importancia militar estratégica de Puerto Rico para los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, recomendando se le permitiera a los puertorriqueños votar para elegir su gobernador sin que ello afectara los poderes plenarios de Estados Unidos sobre Puerto Rico, evento que vino a ocurrir, concluida la Segunda Guerra Mundial, eligiendo gobernador a Luis Muñoz Marín.

asamblea o convención de estatus, estaríamos dando un salto de calidad en el proceso de ejercicio del derecho a la libre determinación.

Más allá de lo antes indicado, en lo que sí insistimos y debemos darle la mayor prioridad, es al desarrollo de la discusión en Puerto Rico de la vía procesal de convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus.

Defendemos la propuesta que desde la sociedad civil promueve el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico²⁹. Esa propuesta es, la que por petición, es hoy el P. de la C. Número 5. Reconocemos que este proyecto puede ser mejorado con nuevas ideas, por ejemplo, cómo ha de darse la participación de la diáspora puertorriqueña en el proceso de elección de delegados y su representación con delegados en la Asamblea; cuál ha de ser finalmente su número y el número total de delegados de la Asamblea; cómo interactuará la Asamblea de delegados en Puerto Rico con un organismo como el propuesto en el *Puerto Rico Self-determination Act de 2021* de Comisión Negociadora Bilateral, etc.

Reconocemos también el hecho de que existen otras modalidades de Asamblea Constitucional de Estatus que han sido propuestas. En ellas se encuentran elementos coincidentes con la que impulsa el Colegio y la que desde los partidos políticos se asume, principalmente en torno a la responsabilidad en la definición de las fórmulas y en la propuesta de estructura de negociación con la contra parte estadounidense. Sin embargo, lo importante en esta etapa, es impulsar el método, afinando en el trámite legislativo, sus características y sus competencias.

Un elemento que contribuiría al proceso de discusión en el país es la radicación de resoluciones a nivel de las legislaturas municipales para que a través de ellas se lleven a cabo procesos de vistas públicas,

²⁹ Torres Rivera, Alejandro: *La Asamblea Constitucional de Estatus: alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos*, Editorial Procopio (2014). En el libro se hace un resumen integral hasta a fecha de su publicación de las diferentes propuestas históricas en torno al uso del mecanismo de asamblea como alternativa de nuestro pueblo hacia su descolonización y libre determinación.

tanto sobre el P. de la C. Número 5 como de los proyectos radicados por las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez.

En esta reflexión final pienso una vez más en el Tormento de Sísifo como aquella larga cadena que nos impide trascender la condena de los dioses. Sin embargo, a mi mente también llega, tomando como base la historia antigua, otra manera de romper esa cadena que nos ata y consume.

En la antigua Grecia, se cuenta que quienes habitaban en Frigia, localizada en lo que hoy es Anatolia, Turquía, necesitaban elegir a un rey por lo que sus ciudadanos procedieron a consultar con el Oráculo. Se indica que la respuesta del adivino fue que llegaría alguien entrando por la puerta que daba al Este de su recinto con un cuervo posado en uno de sus hombros. Le tocó el honor a un trabajador del campo de nombre Gordias, por lo que fue elegido rey. Al fundar la ciudad de Gordio en honor a su nombre, este rey, en agradecimiento y ante el Templo dedicado a Zeus, principal dios de la mitología griega (Júpiter para la mitología romana), amarró una lanza y un yugo con un complicado nudo con sus extremos escondidos, por lo que el nudo no podía desatarse. Se hacía referencia al “nudo gordiano”.

Se indicaba que la persona que fuera capaz de desatar el nudo sería quien conquistaría la región localizada al este de Gordio; es decir las tierras al oriente de su reino. Encontrándose de paso en la expansión de su imperio, Alejandro Magno conquistó la región de Frigia. Llegando al templo dedicado por Gordias a Zeus, al contemplar el nudo, sacó su espada y de un golpe lo cortó en lugar de invertir tiempo en desatarlo.

Dice la leyenda que en ese momento se desató una tormenta de rayos que para los espectadores era el mensaje de los dioses conformes con la solución que Alejandro había adoptado. Nos dice la leyenda que a partir de la ruptura del “nudo gordiano” Alejandro Magno se lanzó a la conquista vastas regiones al Este de Gordias, conformando en poco tiempo uno de los principales imperios de la época.

Es posible ante el tormento de Sísifo, que la opción para nuestro pueblo sea cortar de una vez el nudo gordiano sin esperar a otro ensayo de subir la piedra dando inicio así, sin esperar más, al proceso de libre

determinación. Y lo podemos hacer desde Puerto Rico, mediante la iniciativa de auto convocarnos como país en una asamblea constitucional de estatus rompiendo así el nudo gordiano del colonialismo.

El Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, nos decía que no había nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. Actuar con decisión en momentos que son decisivos para nuestra autodeterminación política como pueblo debe ser la actitud de todos y todas.